

La Ronda del Milenio

La gran expectativa para la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC a celebrarse en Seattle, EE.UU., del 30 de noviembre al 3 de diciembre próximos, es el lanzamiento de una nueva Ronda de negociaciones multilaterales en el año 2000 (la Ronda del Milenio). Las discusiones y posicionamientos para esta eventualidad cobraron fuerza luego de la Segunda Conferencia Ministerial en Ginebra el año pasado. Pero en los últimos meses este proceso ha venido encontrando una serie de obstáculos. Las fuertes divisiones entre los Miembros de la OMC sobre la designación de un nuevo Director General han convertido a ésta en una discusión que todo lo absorbe; el programa de trabajo actual de la OMC ya incluye una gran diversidad de temas, desde los asuntos que quedaron pendientes de la última Ronda hasta nuevos temas que han ido surgiendo desde entonces; el gobierno de EE.UU. aún no cuenta con autorización del Congreso para negociar acuerdos comerciales definitivos (fast track), minando la confianza en las concesiones que ese país pueda hacer; y, la resistencia de ciertos sectores y algunos países a una nueva negociación va en aumento. En fin, el panorama dista de ser sencillo.

Así, pocos avances se lograron en las reuniones del Consejo General de la OMC del pasado 12 de abril y 20-21 de mayo. Estas fueron las primeras reuniones de la segunda fase preparatoria de la Ministerial de Seattle (que se espera terminar a finales de julio, para dar paso a la tercera y última fase de preparación, ver *Puentes* Vol. 1 No. 4), en la que se deben definir objetivos concretos de negociación. Se espera que en esta etapa los miembros presenten propuestas específicas basadas en los documentos de posición presentados en la primera fase. Pero las discusiones sobre la designación del nuevo Director General y las circunstancias mencionadas arriba tuvieron sus impactos; así, la reunión del 12 de abril, planificada para dos días, tuvo que reducirse a medio día. El tiempo disponible de esa reunión se dedicó a lo que es quizás el tema más controvertido en la agenda de la OMC – el Acuerdo sobre Agricultura. Australia, en representación del Grupo Cairns, y Pakistán por su parte, presentaron propuestas de objetivos de negociación. Los documentos presentados y las reacciones que generaron no fueron novedad en la discusión que sobre este tema se viene arrastrando desde la finalización de la Ronda Uruguay (ver *Puentes* Vol. 1 No. 3). Una situación similar se vivió en la reunión siguiente (20-21 de mayo), lo cual obligó a reformular el calendario previsto de reuniones para aumentar la frecuencia de las mismas, si bien el ambiente de la reunión fue, en general, más positivo. Entre los resultados de esta sesión, aparece una propuesta de la UE y varios otros países de incluir recortes arancelarios en una nueva ronda, lo cual motivó expresiones de reserva de varios países en desarrollo que prefieren que las negociaciones se concentren en otros rubros como agricultura y servicios y la aplicación de los acuerdos de la Ronda Uruguay. Se esperan más propuestas de la UE para el tratamiento de una amplia gama de temas en las próximas semanas. La próxima reunión está prevista para el 7-8 de junio.

Pese a todas las dificultades, el impulso hacia una nueva ronda liberalizadora es aún robusto. Es que, como se verá más adelante, también son fuertes los intereses que hay detrás de la iniciativa, y varios países ya se han pronunciado favorablemente (entre ellos, la Unión Europea, Argentina, Brasil, Chile, México, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Japón, Corea, Hong Kong, Singapur, y Tailandia).

Dos procesos en la OMC

Es importante distinguir una eventual Ronda del Milenio del llamado “programa incorporado” que resultó de la Ronda Uruguay – actividades mandadas por los acuerdos de dicha Ronda para los años subsiguientes. Las tareas pendientes son de cuatro tipos: 1) cuestiones pendientes, 2) revisiones especiales, 3) revisiones regulares y 4) nuevas negociaciones. Esta compleja agenda heredada por la OMC incluye una diversidad enorme de temas (ver recuadro en la pág.2) y de por sí representa un gran esfuerzo para los países.

La distinción entre este conjunto de procesos y la Ronda del Milenio es un punto de discusión importante. Es que resultará difícil que una ronda multilateral no gravite sobre el programa incorporado, y hasta absorba algunos de sus elementos, como parece ocurrirá con los temas agrícolas.

Muchos países, especialmente los países en desarrollo, perciben que la aplicación cabal y la revisión de los acuerdos de la Ronda Uruguay según el programa incorporado es condición necesaria para comenzar a cosechar beneficios que esperaban de esa Ronda y que, sienten, aún les son esquivos.

Pero, ¿qué es una Ronda? ¿Qué abarcaría una Ronda del Milenio? ¿Qué posiciones se están formando en torno a la misma? En este número veremos hacer una rápida exploración de este asunto para ilustrar sobre cómo se presenta el escenario general con miras a la Ministerial de Seattle.

Las rondas multilaterales de negociación comercial

Las rondas multilaterales han sido la forma en que ha procedido la negociación de acuerdos comerciales globales desde el establecimiento del GATT en 1947. A diferencia de una negociación sectorial, en la que las deliberaciones en cada área son independientes y se manejan con tiempos y programas de trabajo formalmente desvinculados, una ronda multilateral es un proceso en el que varias áreas quedan comprendidas y son negociadas simultáneamente por todos los países pertenecientes al sistema multilateral de comercio (actualmente la OMC). La diferencia sustantiva entre ambas formas de proceder radica en que, mientras la negociación sectorial restringe el universo de lo transable, una ronda, al interrelacionar las negociaciones sobre distintas materias, ofrece un escenario mucho más amplio para hacer concesiones y obtener beneficios.

Durante la Ronda Uruguay se mencionaba con frecuencia la posibilidad de que la existencia de la OMC volvería innecesarias futuras rondas, al contarse con un foro en el que habría una suerte de negociación permanente. Si bien las Reuniones Ministeriales de Singapur y Ginebra parecieron confirmar esto al lanzar dos procesos de liberalización fuera del marco de una ronda – el comercio de productos de la tecnología informática y el comercio electrónico respectivamente – estos continúan siendo casos aislados, relativos a temas de interés fundamentalmente para las economías más desarrolladas.

Para las economías en desarrollo, la fragmentación de las negociaciones

EN ESTA EDICION

La Ronda del Milenio	1
Noticias OMC	4
Mecanismo de Solución de Diferencias	5
Noticias Regionales	7
AMUMAs	9
¿Cómo proteger el sistema de la OMC de los ‘infractores persistentes’?	11
Eventos y Publicaciones	16

comerciales, si bien aceleraría la conclusión de acuerdos en áreas específicas, podría resultar contraproducente. Careciendo de una estructura que, como la de la OCDE, permita una preparación más cabal, estos países podrían encontrarse en situación de desventaja en un escenario de proliferación de pequeñas negociaciones. En un sistema de rondas, la negociación de la agenda generalmente da a los países algún tiempo para diseñar sus propias agendas. Los cuatro años de preparación de la Ronda Uruguay (1982-86) permitieron generar gran cantidad de áreas de negociación, con lo cual, en la Declaración de Punta del Este, quedó reflejado un compromiso entre el programa de trabajo de los países industrializados y la más tradicional que venía de la Ronda de Tokio. La existencia de rondas es una garantía de que se forje una agenda equilibrada.¹

Más aún, en general se percibe que contar con un escenario de negociación ampliado favorece la capacidad de los países más débiles de obtener beneficios ofreciendo concesiones en distintas áreas. Esto responde, por un lado, a que la dinámica de la negociación comercial es una de *quid pro quo*, pero principalmente a que el proceso de liberalización del comercio internacional ha evolucionado, pasando del tratamiento casi exclusivo de temas arancelarios directamente relacionados con el acceso a mercados, como ocurría en el GATT, hasta la inclusión de 'nuevos temas', algunos más controvertidos que otros, como inversiones, política de competencia y contrataciones del sector público, así como la incorporación de una visión del desarrollo sostenible, que implica atender consideraciones ambientales y sociales relacionadas con el comercio. Es decir, se ha expandido la definición de 'liberalización comercial' y 'acceso al mercado', trayendo una mayor complejidad a los esfuerzos de integración económica a nivel regional y multilateral, y ampliando significativamente el alcance de las negociaciones comerciales.

La Ronda del Milenio

Dada la herencia de la Ronda Uruguay, la ampliación del alcance de las negociaciones comerciales a nuevas áreas y los cuestionamientos a los beneficios que la liberalización, como parte de un proceso de globalización, está trayendo, la idea de una ronda multilateral resulta esta vez particularmente problemática.

La Ronda del Milenio confronta básicamente dos intereses en torno a la evolución del sistema multilateral del comercio: la aplicación plena y el análisis de los impactos de la Ronda Uruguay por un lado, y la necesidad y conveniencia de continuar con el proceso liberalizador sin demoras, por el otro.

Como se indicó más arriba, la Ronda Uruguay dejó un gran número de cuestiones abiertas, la gran mayoría de interés para los países en desarro-

llo. La aplicación plena y la revisión de acuerdos como el de Agricultura, el de medidas anti-dumping y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) deben aún abordarse plenamente, y son especialmente los países en desarrollo quienes desean ver estos procesos avanzar, ya que perciben que, en gran medida, los beneficios que esperaban conseguir de la Ronda Uruguay no terminan de concretarse. Más aún, con el tiempo muchos países han descubierto algunas de las implicaciones de los acuerdos que firmaron en Marrakech – esta falta de preparación y análisis de las conse-

cuencias puede afectar también las negociaciones en una Ronda del Milenio. Adicionalmente, hay un creciente coro de organizaciones de la sociedad civil que reclaman una evaluación de los impactos (económicos, sociales, ambientales) de la liberalización hasta el momento (en particular de los acuerdos de la Ronda Uruguay) antes de lanzarse a un nuevo proceso. Pero la actitud de los países en desarrollo también pasa por el reconocimiento realista de que cualquier revisión de los acuerdos de la Ronda Uruguay que vaya a beneficiarlos deberá enmarcarse en una ronda para asegurar que estos tengan qué ofrecer a cambio del cumplimiento más estricto de obligaciones o la obtención de nuevas concesiones. Este es particularmente el caso de los países agroexportadores, principalmente de América Latina, que favorecen una Ronda del Milenio como la forma más efectiva de avanzar en la revisión del Acuerdo sobre Agricultura y lograr su objetivo de colocar este comercio en un pie de

igualdad con el comercio de los demás bienes.

Por otra parte, las naciones más industrializadas ven la conveniencia de avanzar en la liberalización de sectores como el de servicios, inversión, política de competencia y contrataciones del sector público, a más de impulsar el tratamiento explícito de temas conexos al comercio, como el laboral y el ambiental. Importantes sectores en estos países ven la continuación del proceso liberalizador como un antídoto necesario contra los siempre presentes impulsos proteccionistas. Frenar el proceso multilateral podría desencadenar una reversión hacia el regionalismo y la guerra comercial (especialmente Europa y EE.UU.), análisis que puede escucharse cada vez con más frecuencia. En un documento para la reunión de Ministros de Comercio del pasado 9 de mayo, la Comisión Europea argumenta que “[l]a economía global enfrenta hoy circunstancias comparables a aquellas que precedieron a la Ronda Uruguay trece años atrás, a saber, una desaceleración del crecimiento, particularmente en Asia, pero también en otras regiones. En Europa, una mayor liberalización y expansión comercial a través de la OMC podría ayudar a estimular la competencia, el crecimiento y el empleo”.

¹ Rubens Ricupero, en *The Uruguay Round and its Follow-up: Building a Positive Agenda for Development*, UNCTAD, 1997.

Algunos ejemplos de temas en el programa incorporado

Cuestiones pendientes

- Servicios (servicios marítimos, contrataciones gubernamentales, subsidios, contabilidad, servicios ambientales)
- Antidumping (elusión de derechos antidumping)
- Armonización de normas de origen no preferenciales
- Reforma del artículo 10.2 del Acuerdo sobre Agricultura

Revisiones especiales

- Subsidios (artículos 8, 9 y 27.6 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias)
- Art. 27.3 b) del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (protección de variedades de plantas)
- Normas para la revisión de normas antidumping
- Aplicación de medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio y la necesidad de complementarlas con disciplinas sobre inversiones y política de competencia

- Interpretación de las normas sobre modificación y retiro de concesiones, cláusulas de anterioridad y dispensas
- Aplicación de los compromisos del Acuerdo sobre Agricultura

Revisiones regulares

- Funcionamiento del mecanismo de revisión de políticas comerciales
- Procedimiento de Notificaciones
- Aplicación y funcionamiento de los acuerdos sobre valuación en aduanas, licencias de importación, salvaguardias, antidumping, normas de origen, procedimientos de solución de diferencias y propiedad intelectual

Nuevas negociaciones

- Continuación del proceso de reforma del Acuerdo sobre Agricultura (art. 20)
- Ampliación de la liberalización del comercio de servicios
- Contrataciones del sector público

En resumen, la resistencia de los países en desarrollo a embarcarse en una nueva Ronda puede sintetizarse en la necesidad de no desviarse de la aplicación de los acuerdos de la Ronda Uruguay, de la cual todavía tienen que obtener más beneficios, la falta de capacidad, en algunos casos, de encarar al mismo tiempo las revisiones de estos acuerdos que deben comenzar pronto y una negociación multilateral, y la insistencia en incorporar nuevos temas al ya cargado programa de trabajo de la OMC.

Visiones Sectoriales

Entre los sectores sociales, son varias las reacciones que despierta este proceso. Para el movimiento sindical, una Ronda del Milenio no representa mayores peligros. Más aún, ven en ella una oportunidad de avanzar su agenda de vinculación del comercio a las normas laborales. Los sindicatos se han fijado como meta el mantener las normas del trabajo en el programa de la Ministerial de Seattle para avanzar hacia la inclusión de una cláusula de derechos de los trabajadores en la OMC. “[E]n este momento, el Artículo XX del GATT permite que los estados miembros restrinjan las importaciones de mercancías realizadas con trabajo carcelario. Esta disposición se debería ampliar a fin de que incluya otras normas fundamentales del trabajo: libertad sindical, derechos de sindicalización y negociación y prohibición del trabajo de menores, del trabajo forzoso y de la discriminación en el empleo” manifestó recientemente la AFL-CIO (la agrupación sindical más grande de EE.UU.). Parte de la estrategia para lograr una cláusula laboral podría ser la creación de un grupo de trabajo sobre el tema para revisar las disposiciones de la OMC a la luz de los compromisos enunciados en el párrafo 4 de la Declaración de Singapur.

El movimiento tiene en los países de Europa occidental y EE.UU. sus más firmes aliados. En América Latina, el panorama es más complejo. Si bien algunos gobiernos muestran una cautelosa apertura al tema (Venezuela, Honduras, Argentina), la mayor parte oscila entre una oposición matizada (Brasil) y un rechazo firme (Colombia, Cuba, Costa Rica, Perú, México). Lo mismo ocurre en regiones como el sur y sudeste asiático.

El tener un objetivo preciso y claro permite al movimiento sindical un juego de alianzas con actores de intereses muy diversos. Así, a medida que la Ronda se aproxime podrían emerger alianzas tácticas entre el sindicalismo y movimientos sociales, como el ambiental, de género, consumidores y otros.

Entre los empresarios el apoyo a una Ronda del Milenio y la mayor liberalización en general es más claro. En un mensaje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) a la Cumbre del G8 el pasado 20 de mayo, este sector expresa su respaldo al inicio de una nueva ronda. Esta “contribuiría significativamente al restablecimiento de la confianza en la recuperación de la economía mundial luego de la crisis en los mercados emergentes” dice el mensaje, presentado por ICC Business World. Esta ronda debe ser corta y “evitar que se repitan las nocivas demoras que caracterizaron la Ronda Uruguay. [El proceso] debe adaptarse al ritmo del cambio en el mercado global para mantener las reglas a tono con la evolución de la realidad y las necesidades de la empresa”. El sector empresario apoya una concepción am-

plia de ‘acceso al mercado’ en línea con la tendencia que se ha venido dando desde la Ronda Uruguay.

Sectores empresarios latinoamericanos comparten esta visión y prioridades. Al sector industrial latinoamericano le interesa particularmente el alcance de los acuerdos de la Ronda Uruguay, especialmente el Acuerdo sobre Agricultura. “Respecto de los otros temas, las ventajas para los países en desarrollo son inciertas, no se perfilan con claridad, ya que no se tienen en cuenta nuestras condiciones particulares” dice Hernán Puyo, Vicepresidente de Comercio Exterior de la Asociación Nacional de Industrias de Colombia. “El tema de la baja de aranceles no es más el tema de importancia, puesto que actualmente los niveles son bajos, y una reducción del 10 al 20% no tiene en la práctica un efecto significativo. En cuanto a los temas nuevos que una Ronda traería (transparencia, medio ambiente, derechos humanos), parece inevitable su tratamiento, ya que es una agenda internacional que se impone en diferentes foros. Pero es necesario darles cabida con precauciones, especialmente al tema laboral, debido a sus implicaciones. En general, el tratamiento de estos temas sería muy saludable” dice Puyo.

El panorama entre las organizaciones no gubernamentales resulta más complejo. Hay una gran diversidad de posiciones sobre la conveniencia y las condiciones de una Ronda del Milenio, aún entre aquellas que desarrollan actividades en el mismo sector (medio ambiente, desarrollo social, género, consumidores, etc.). Sin embargo, pueden verse algunas preocupaciones comunes, que dan lugar a estrategias distintas. Podría decirse que todas estas organizaciones están preocupadas por los posibles impactos que tendría una mayor liberalización sobre las distintas áreas de interés. Desconociéndose aún los impactos de la Ronda Uruguay, en general hay acuerdo sobre la necesidad de evaluarlos, así como los de posibles avances futuros, antes de iniciar una nueva Ronda. Algunas organizaciones extienden esta preocupación a una desconfianza en la OMC, a la que ven como un foro en el que los intereses no comerciales quedan soslayados, y en consecuencia se oponen a todo proceso que, como la Ronda del Milenio, la pudiera fortalecer.

“Los acuerdos de la Ronda Uruguay han funcionado principalmente para abrir los mercados en beneficio de las corporaciones multinacionales, a costa de las economías nacionales, los trabajadores, campesinos y otros grupos y el medio ambiente. Además, el sistema de la OMC, sus normas y procedimientos no son democráticos, carecen de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas, y han operado para marginalizar a la mayoría de la población del mundo (...) Llamamos a una moratoria en todos los nuevos temas o negociaciones que expandan el ámbito y el poder de la OMC”. (*Declaración de miembros de la sociedad civil internacional en oposición a una Ronda del Milenio*).

Las posiciones oscilan entre la precaución y el rechazo – entre quienes reconocen que el comercio internacional y las inversiones son “componentes fundamentales de un ambiente económico propicio para el desarrollo social”, pero recomiendan que “no se inicie una nueva Ronda (...) mientras no se hayan analizado y asimilado los impactos sociales de la Ronda Uruguay, muchas de cuyas medidas favorables a los países en desarrollo aún no han comenzado a aplicarse” (*10 Demandas de las ONGs para la Cumbre Social de Ginebra 2000*), y quienes se oponen a “cualquier negociación de liberalización” (declaración firmada por unas 500 organizaciones de distintas partes del mundo). Algunos entre los primeros ven en la eventualidad de que la Ronda del Milenio tenga lugar una ocasión para impulsar sus demandas y lograr insertar en el sistema multilateral de comercio consideraciones que trascienden lo comercial. Los segundos se han embarcado en una estrategia de bloqueo de la Ronda del Milenio y de deslegitimación de la OMC.

Cuestiones en torno a la Ronda del Milenio

El proceso de preparación para la Ministerial de Seattle gira en torno a la definición de dos cuestiones: los contenidos de la Ronda, y el procedimiento de negociación.

Para la ICC, una nueva ronda debería tener entre sus prioridades estratégicas:

- Mayor liberalización en el comercio de servicios;
- Restringir las medidas proteccionistas que entorpecen el comercio agrícola;
- Crear en la OMC normas multilaterales para liberalizar y proteger la inversión extranjera directa;
- Mejorar la participación, alcance sectorial y la transparencia de las provisiones de los acuerdos sobre contrataciones del sector público;
- Desarrollar criterios consistentes con las normas de la OMC para la utilización de medidas comerciales contenidas en acuerdos ambientales multilaterales;
- Abordar la amenaza que el ecoetiquetado representa como obstáculo de facto al comercio.

Revisión del Entendimiento de Solución de Diferencias

Durante la sesión especial del Consejo General de preparación para la Conferencia Ministerial de Seattle, Pakistán presentó una propuesta “para el examen, clarificación y modificación de algunas de las disposiciones del Entendimiento de Solución de Diferencias”. A pesar de que la propuesta fue presentada en el marco de la preparación para la Ministerial, la mayoría de observadores creen que la revisión del ESD, estará lista para julio, y no será incluida en la siguiente ronda de negociaciones comerciales. Las recomendaciones que surjan de la revisión, serán presentadas a los ministros en Seattle, donde cualquier cambio al ESD tendrá que ser adoptado por consenso.

La propuesta de Pakistán se refiere a tres categorías: selección de los miembros de los paneles; el rol del Organo de Apelación; y compensación y suspensión de concesiones. Sobre el primer tema, Pakistán sugiere que los miembros soliciten a la Secretaría preparar un documento explicativo de los procedimientos seguidos actualmente en la preparación de la ‘lista indicativa’ de individuos que poseen las calificaciones necesarias para servir como miembros de un Panel.

Para asegurar que el Organo de Apelación se limite a examinar las ‘cuestiones jurídicas’ cubiertas por los informes de los paneles, Pakistán propone que el mismo reenvíe el caso al Panel original para re-examinación si considera que no atendió todos los hechos o cuestiones legales pertinentes.

Pakistán también requiere que “en todos los casos que el Organo de Apelación considere que interpretaciones más amplias o diferentes [de las disposiciones de la OMC], sean justificables y equitativas tomando en cuenta desarrollos contemporáneos, éste deberá referir el tema al Consejo General para su consideración y para hacer tales modificaciones en las normas relevantes, según los países Miembros consideren apropiado”.

De acuerdo a Pakistán, el Organo ha excedido su mandato cuando - en el caso camarones-tortugas - dictaminó que “a la luz de las preocupaciones contemporáneas la referencia a ‘recursos naturales perecibles’ en el Artículo XX(g) del GATT originalmente previsto para cubrir ‘recursos físicos’ debe ahora extenderse para cubrir ‘recursos vivos’”. Esta interpretación, argumenta Pakistán, ha incrementado de manera significativa la posibilidad de que el Artículo XX sea invocado para justificar medidas comerciales restrictivas y ha resultado en la “disminución de los derechos disponibles de los países Miembros bajo el GATT”.

A la luz de la ‘incertidumbre’ creada por la decisión del Organo en el caso camarones-tortugas sobre la posibilidad de que los paneles tomen en cuenta información no solicitada presentada por grupos no gubernamentales, Pakistán considera que es ‘necesario clarificar las provisiones del Artículo XIII.2 ya que éste no permitiría a los paneles ni al Organo de Apelación tomar en cuenta “información no solicitada” incluyendo *amicus briefs* provenientes de partes privadas’.

Otra preocupación de Pakistán es el derecho de represalia cruzada en el caso de no cumplimiento de las normas de la OMC. “En esencia estas disposiciones implican que por una violación en las áreas de servicios y de propiedad intelectual por un país en desarrollo, la represalia pueda ser asumida en el sector de productos”. Esto requiere de una clarificación que especifique que la represalia en contra de países en desarrollo solo deberá efectuarse bajo el mismo Acuerdo que fue violado. Pakistán sugiere además que cuando a un país en desarrollo se le requiera compensación financiera, el monto deberá ser independiente del requisito de remover las medidas ofensivas y deba ser determinado tomando en cuenta factores tales como el impacto de la medida y la duración, así como el tiempo que tomará desarrollar las exportaciones después de que la medida ha sido removida.

Consejo de los ADPIC discute procedencia de reclamos por no violación

En su reunión del 21-22 de abril el Consejo de los ADPIC discutió si el Acuerdo debería continuar descartando reclamos por ‘no violación’ en las disputas sobre sus disposiciones. Una medida de ‘no violación, anulación o menoscabo’ es aquella que, aún cuando no viola las disposiciones del Acuerdo, tienen como efecto la anulación o menoscabo de un ‘beneficio’ asegurado por el mismo. El motivo de tal disposición es la protección del equilibrio general de las concesiones razonablemente esperadas cuando el acuerdo fue firmado.

La importancia de esta discusión radica en las implicaciones que su resultado tendrá sobre el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y por ser un posible antecedente que fundamente la prolongación del período de gracia concedido a los países en desarrollo para cumplir con los acuerdos de la Ronda Uruguay.

Según el Artículo 64 del Acuerdo de los ADPIC, el recurso a los reclamos en casos de no violación sobre derechos de propiedad intelectual serán admisibles desde el 1 de enero del 2000 salvo que haya consenso en contrario entre todos los Miembros de la OMC.

El Consejo cuenta con dos documentos de posición. Uno presentado por Canadá, que aboga por una revisión sustantiva del tema. El documento señala que las reparaciones por no violación fueron desarrolladas en un contexto distinto como una forma de asegurar el acceso a mercados, y que no corresponde en el ámbito de los ADPIC, donde podría introducir una incertidumbre nociva. Permitir el recurso a reparaciones por no violación en esta área podría limitar la capacidad de los Miembros de tomar medidas sobre política social, salud y protección ambiental.

El segundo documento fue presentado por Cuba, República Dominicana, Egipto, Indonesia, Malasia y Pakistán. El documento hace un llamado a extender el plazo referido en el Artículo 64 hasta que las complejas implicaciones de las reparaciones por no violación puedan ser mejor comprendidas. El documento señala que los países en desarrollo,

que actualmente gozan de períodos de transición, no estarían en condiciones de evaluar las implicaciones de la aplicación de reparaciones por no violación para finales de año.

Un número de países, incluyendo Hungría, India, Hong Kong, Japón, Nueva Zelandia y Ceylán expresaron su apoyo a ambos documentos. Algunos, incluyendo la India y Egipto, indicaron que quisieran ver las disposiciones sobre no violación eliminadas de los ADPIC. EE.UU. no apoya la extensión del plazo de suspensión de los reclamos por no violación y se opone a la eliminación de estas disposiciones. Sin embargo, algunos observadores coinciden que EE.UU. se verá aislado en este tema y que tendrá que permitir al menos una extensión de la moratoria. El Consejo de los ADPIC continuará la discusión del tema en su reunión de julio.

En otro asunto, los Miembros de la OMC continúan en desacuerdo sobre si la revisión del Artículo 27.3(b), que debe terminar este año, es una revisión de la aplicación o de la substancia de la norma. El Artículo en cuestión estipula que las invenciones animales o vegetales no requieren protección a través de patentes, pero que las variedades de plantas deben ser protegidas ya por patentes o por un sistema *sui generis*. La Unión Europea y EE.UU. argumentan que el objetivo de la revisión es examinar la aplicación de la cláusula, si bien ambos manifestaron que estarían dispuestos a discutir la re-negociación de la disposición.

Los países en desarrollo señalan que, dado que no están obligados a aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC hasta el 1 de enero del 2000, no tiene sentido hablar sobre la aplicación en este momento. Se cree que algunos países en desarrollo - como la India, Malasia y Filipinas - presentarán propuestas de modificaciones al texto del artículo. Unos 30 países han presentado a la Secretaría de la OMC documentos describiendo cómo han implementado el Artículo 27.3(b). Entre ellos, los únicos países en desarrollo son Zambia y Marruecos. La Secretaría de la OMC está compilando una síntesis de los documentos recibidos que debería estar disponible en breve.

La disputa del banano: más allá del comercio

La disputa en torno al régimen de la Unión Europea (UE) para la importación de banano, sobre la cual hemos informado reiteradamente en números anteriores, es un caso que trasciende las bananas y toca una serie de temas más amplios: la efectividad de la OMC en el cumplimiento de su normativa, el uso de sanciones comerciales como mecanismo de aplicación y resarcimiento, la legalidad de las preferencias comerciales a países menos desarrollados, el impacto de las normas del comercio multilateral sobre el desarrollo de los países mas pobres, y las falencias técnico-jurídicas del procedimiento de solución de diferencias de la OMC.

En el último acontecimiento de una historia que ya lleva seis años y unas 12 decisiones en el marco del mecanismo de solución de diferencias del GATT-OMC (el régimen fue adoptado en febrero de 1993, y el primer Panel que decidió sobre su legalidad emitió su decisión ese mismo año), el pasado 19 de abril el Organo de Solución de Diferencias (OSD) reconoció el derecho de los EE.UU. de imponer aranceles punitivos sobre una gama de exportaciones europeas por un valor de aproximadamente US\$200 millones y sugirió medidas que la UE podría adoptar para poner su régimen en conformidad con la OMC. Esta autorización sigue las decisiones de los árbitros y el Panel emitidas el 9 y 12 de abril (las decisiones pueden encontrarse en <http://www.wto.org>). Los informes del Panel (solicitados por Ecuador y la UE) concluyen que el régimen revisado de importación de banano en vigor desde el 1 de enero de este año todavía infringe el Artículo XIII del GATT (prohibición de administrar restricciones cuantitativas de manera discriminatoria), el Artículo I (trato de nación más favorecida), y los Artículos II y XVII (status de nación más favorecida y trato nacional). Las decisiones fueron aprobadas por la OMC el 6 de mayo.

El laudo arbitral determinó los daños que el régimen de la UE ha causado a la economía de EE.UU. en US\$191.4 millones anuales. En consecuencia, el OSD, por primera vez, autorizó el uso de sanciones comerciales por incumplimiento de decisiones del mecanismo de solución de diferencias. EE.UU. puede ahora imponer aranceles del 100% a la importación de productos de la UE cuyo valor combinado de exportación sume el monto estimado por los árbitros. No quedó claro, sin embargo, si los aranceles podrán imponerse retroactivamente al 3 de marzo, como alega EE.UU.

A solicitud de Ecuador, el Panel sugirió medidas que la UE podría tomar para ajustar su régimen a las normas de la OMC. La forma más simple sería la eliminación de las cuotas separadas para el banano de los países de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP) y América Latina, continuando al mismo tiempo con la concesión de aranceles preferenciales para el banano del ACP según la dispensa dada a la Convención de Lomé (ver más abajo). Otra forma sería combinar cuotas específicas para cada país con un tratamiento libre de aranceles para el banano ACP. Varios diplomáticos indicaron que cualquier dispensa para un acuerdo de cuotas sería difícil de obtener. La decisión del Panel de no hacer recomendaciones sobre las formas de modificar el sistema discriminatorio de licencias de importación es otra indicación de que los aranceles preferenciales son la única forma en que la UE podría continuar apoyando a los productores e importadores de banano ACP.

La UE aseguró que cumplirá con las decisiones y buscará una solución junto con los demandantes y los países productores ACP afectados. Las negociaciones para conciliar los diferentes intereses y la promulgación de las reformas legales posiblemente tomarán meses. Las sanciones de EE.UU. se mantendrán hasta que el régimen que adopte la UE sea considerado compatible con las normas de la OMC.

¿Comercio o Derecho?

Pero en esta disputa no todo pasa por la fruta y su régimen. En reiteradas ocasiones, la representación comercial de los EE.UU. indicó que la

cuestión del banano no era simplemente una cuestión del comercio de ese producto, sino un tema de efectividad de la OMC y la necesidad de impedir que una potencia económica como la Unión Europea viole sus disposiciones sin sufrir consecuencia alguna. Desde ciertos sectores se ha criticado duramente esta aproximación de principios a la disputa (en lugar de una más pragmática), argumentando que la intransigencia que estas actitudes generan causa un daño mayor al complicar las relaciones comerciales de las dos economías más importantes del mundo, con el consecuente riesgo de una guerra comercial. En efecto, una de las reacciones de la UE frente al involucramiento de EE.UU. en la disputa fue cuestionar en la OMC la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 de EE.UU. que permite al gobierno de este país imponer sanciones comerciales en condiciones que, argumenta la UE, son inconsistentes con las normas de la OMC. Las disputas en torno a las exportaciones de EE.UU. de carne tratada con hormonas y granos genéticamente modificados son elementos más de una relación tensa, que podría empeorar a medida que avance la revisión del Acuerdo sobre Agricultura.

Mas allá de la solidez, la conveniencia o la inconveniencia de este argumento de los EE.UU., lo cierto es que la credibilidad de la OMC se juega cada vez que un Panel decide sobre una disputa y las partes no acatan la decisión. A tal punto que, en una reciente entrevista, el economista Lester Thurow recomendó a los países de América Latina no hacer caso de los dictados de la OMC, ya que potencias como la UE no la respetan (haciendo alusión al caso del banano). Aunque la gran cantidad de recursos al mecanismo de solución de diferencias de la OMC son una muestra de la robustez del sistema, la reticencia de la UE a aceptar las decisiones del OSD y la incapacidad de los países demandantes, en este caso de América Latina, de forzarla a cumplir con la ley, aumentan el nivel de cinismo con que se mira la idea de un régimen comercial basado en reglas (y no en la fuerza) sobre la que la OMC se ha fundado. Ecuador, por ejemplo, quizás el país más afectado por el actual régimen de la UE, ha recibido con escepticismo los últimos fallos – es la tercera vez que este país gana el caso sin lograr una modificación del régimen.

¿Comercio o Desarrollo?

Otra arista de suma importancia que este caso evidencia es la cuestión de las consecuencias de la posible ilegalidad de un régimen preferencial orientado a asistir el desarrollo de algunas de las economías más pobres del planeta, especialmente en Africa y el Caribe.

Son muchos los países de estas regiones que dependen críticamente de las exportaciones a Europa de un banano que los especialistas coinciden no puede competir con el banano latinoamericano ni en precio ni en calidad. La decisión de la OMC es grave para estos países. Eventualmente, esta tendencia resultará en una reducción de su participación en el mercado europeo, en el que las multinacionales serán las que más ganen. Según actores en esos países, no solo se trata de un proceso que va en detrimento del banano ACP como tal, sino también de las condiciones de los pequeños productores de esos países, que ya no podrán subsistir frente a las grandes compañías. No hay que perder de vista que estas mismas empresas también producen en los países ACP (como Chiquita y Dole), y que la asistencia que la UE planea dedicar a la modernización de las plantaciones en estos países las beneficiará directamente.

Desde la perspectiva ACP, el conflicto se enmarca en el proceso general de revisión de la Convención de Lomé que impulsa la UE. La Convención de Lomé fue concebida en los años 70 como un marco para la cooperación para el desarrollo entre Europa y sus ex-colonias en Africa, el Caribe y el Pacífico, que incluye, entre otras, disposiciones comerciales que proveen acceso preferencial al mercado de la UE para exportaciones de los signatarios. La actual Convención (la cuarta que

se ha suscrito) expira en el año 2000, y la UE busca reemplazar los compromisos relativos a comercio incluidos en la misma por acuerdos puramente comerciales de liberalización negociados por separado con las distintas regiones o países signatarios, cuestión que tiene a los países ACP en alerta dadas las condiciones que la normativa de la OMC podría imponer a semejantes acuerdos, por ejemplo en lo relativo a preferencias comerciales no recíprocas y los plazos de transición del actual régimen a uno nuevo. Esta circunstancia agrega a la incertidumbre que la reforma al régimen del banano de la UE crea para las economías de estos países en el corto y mediano plazo.

Y no solo se trata de una cuestión económica. Detrás de ella llega la disgregación social y la inestabilidad política. Un anticipo de lo que podría venir se puede entrever en la declaración que, a raíz de las sanciones que EE.UU. impuso a la Unión Europea, emitieron los miembros de la Comunidad del Caribe el 8 de marzo pasado en la que comunican que suspenderían el acuerdo sobre control del narcotráfico que tienen con los EE.UU.

Reacciones desde el Caribe

En una nota en *This Week in Europe* (16 de abril de 1999), David Jessop, Director Ejecutivo del Consejo del Caribe para Europa, expresó que “[R]esulta difícil comprender las implicaciones de las tres [últimas] decisiones de la OMC sobre banano. Pero para miles de pequeños agricultores en todo el Caribe, el resultado de lo que ocurra a continuación es de importancia crítica para su calidad de vida, la supervivencia económica de muchas economías caribeñas y la estabilidad de toda la región.

La aceptación de la decisión de la OMC por la UE puede ser la base de la última y más difícil etapa de la guerra del banano: un acuerdo negociado que provea a los agricultores caribeños de la seguridad que necesitan.

Los productores de banano del Caribe son claros. Requieren un régimen que les de certidumbre y un período de por lo menos diez años de estabilidad en un acuerdo que, aún fuera de la Convención de Lomé, debe cumplir plenamente con las disposiciones de la misma sobre banano. Es decir, un sistema que asegure el acceso al mercado de la UE y además un retorno viable por los volúmenes tradicionales de fruta. Esto, argumentan, es sólo posible si se establece un nuevo sistema compatible con la OMC que continúe limitando el volumen de banano en el mercado de la UE. Un sistema basado sólo en aranceles como algunos han sugerido, no lograría este propósito, ya que haría que los pequeños volúmenes de fruta del Caribe se vean desplazados por los grandes volúmenes a bajo costo de la fruta de América Latina y otras regiones. Si la forma de evitar ésto es a través de medidas adicionales, entonces podría haber modelos viables no demasiado alejados de las ideas anteriormente promovidas por la Oficina del Representante Comercial Especial de los EE.UU.”

Reacciones desde América Latina

Las recientes decisiones también han generado inquietudes entre los demandantes. Para el principal exportador de banano latinoamericano a la UE, Ecuador, ésta es la tercera vez que se gana el caso sin lograr que la UE modifique el régimen. La intervención directa de EE.UU. esta vez en la disputa da esperanzas de que ahora sí se logren cambios significativos.

Ecuador tiene la cuota más grande de importación al mercado europeo (26,17% en 1997), y este tráfico representa el 16,35% de las exportaciones de este país. Los productores ecuatorianos afirman que están en condiciones de mejorar en mucho esa cuota, por la gran competitividad de sus productos y porque circunstancialmente existe una sobreproducción que ha deprimido los precios.

Las decisiones de la OMC, si bien favorables para los productores de este país, generan cierta incertidumbre, dado que se abre ahora un período de renegociación del régimen europeo, en el que Ecuador tiene la cuota más grande, y en el que, es de esperar, las compañías norteamericanas buscarán mejorar su posición. Las sugerencias que el Panel hace a la UE de posibles regímenes modificados despiertan reacciones de todo tipo entre los productores ecuatorianos – no hay acuerdo sobre la conveniencia de ninguno en particular – pero creen que su situación en el mercado europeo no empeorará, y que están en condiciones de mejorarla significativamente. La decisión del Panel autoriza al Ecuador a solicitar compensaciones por los costos en que han incurrido sus productores por la compra de licencias de importación a la UE. El país analiza en estos momentos la conveniencia de proceder con esta solicitud y los montos que se reclamarán oportunamente.

Ecuador no se opone a un régimen preferencial para los países ACP, aunque más moderado, ya que ni aún los productores más grandes de estos países (como Côte d’Ivoire y Camerún) representan una amenaza al comercio ecuatoriano (como sí la representan los productores colombianos y costarricenses). Pero es importante recordar que las exportaciones de banano representan el 25% del ingreso nacional (si bien ésta es una proporción mucho menor que en ciertos países ACP, en los que llega a representar 60% o más), y el año pasado casi supera al petróleo como la fuente más importante del país, por lo que, señalan en Ecuador, la dimensión de desarrollo es muy fuerte también allí.

Cuestiones legales

La disputa ha puesto al descubierto una serie de falencias técnicas en el ESD. La ambigüedad de varias normas han favorecido tácticas dilatorias del cumplimiento con las decisiones del mecanismo de solución de diferencias. El artículo en la pág. 11 pasa revista de estas fallas.

El gobierno de los EE.UU. podría enfrentar nuevos litigios con grupos

EE.UU. tendría que cambiar plan sobre tortugas y camarones tras demanda de grupos conservacionistas

conservacionistas sobre su política de importaciones de camarón. A instancias del Earth Island Institute, Sierra Club y Human Society, la Corte de Comercio Internacional de ese país emitió el 2 de abril un dictamen preliminar en el sentido de que la certificación de importaciones de camarón embarque por embarque no estaba, en principio, de acuerdo con la Sección 609 de la Ley 101-162. La Sección 609 requiere que el gobierno certifique que todo el camarón marino importado al país, haya sido capturado con métodos que protejan a las tortugas de las redes de los camareros.

El Organo de Apelación de la OMC dictaminó en octubre de 1998 que la Sección 609 se refería legítimamente a la protección de recursos naturales perecibles, y como tal podía justificarse según el Artículo XX (g) del GATT. No obstante, encontró inconsistencias significativas en la manera como es aplicada la ley.

En particular, dicho Organo condenó el requerimiento de que el camarón marino solo pueda ser importado de los países que, según certificación del Departamento de Estado, obligan efectivamente a la utilización de los dispositivos excluidores de tortugas (TEDs) en sus pesqueros de arrastre. Las importaciones de otros países fueron embargadas aún cuando se hiciera uso de embarcaciones equipadas con TEDs para la captura de los camarones.

El Organo de Apelación decidió que este proceso de certificación país por país tenía un efecto coercitivo injustificable en las decisiones de política de otros gobiernos al obligarlos a adoptar esencialmente las mis-

Mercosur espera superar la crisis negociando con la UE

Las secuelas económicas y políticas derivadas de la crisis del real han provocado un entorpecimiento de las negociaciones comerciales al interior del Mercosur, hasta el punto de desestabilizar las negociaciones del bloque. A la crisis del real se le suman las medidas proteccionistas y las frecuentes disputas comerciales entre los socios, que han debilitado al Mercado Común del Sur, y comprometen su expansión hacia una zona de libre comercio más amplia.

Por su lado, los gobiernos argumentan que las primeras etapas de integración requieren de negociaciones complejas y se niegan a reconocer que los intereses nacionales están prevaleciendo sobre los intereses del bloque. Se espera que el comercio intraregional disminuya este año en casi 20% - el segundo año consecutivo de caída después de su sorprendente crecimiento de cerca del 4 billones de dólares en 1990 a cerca de 18 billones en 1997.

Los signos de recuperación de la economía brasileña tienen consecuencias en lo político, ya que Brasil y la Comunidad Andina emitieron una declaración conjunta en la que afirman que los avances logrados en la segunda ronda de negociaciones se encaminan hacia un acuerdo final antes del 30 de junio. Este impulso es consecuencia del empantanamiento de las negociaciones entre el Mercosur y la Comunidad Andina. Mercosur no consiguió concretar acuerdos de libre comercio con la CAN y México, y tuvo que recurrir al antiguo esquema de negociaciones bilaterales para la suscripción de acuerdos de preferencias arancelarias.

Sin embargo varios analistas consideran que el Mercosur se encuentra paralizado porque sus avances están sujetos al ritmo de transformación interna de Brasil, y que si Brasil tiene la intención de mantener el Mercosur deberá prestar mayor atención a los efectos de la devaluación del real sobre sus socios comerciales. Por otra parte, Michel Alaby, Vicepresidente de la Asociación del Empresas Brasileñas para la Integración del Mercosur, señala que “no hay un pensamiento de bloque, hay mucho individualismo en todo el proceso”.

A pesar de estas consideraciones a nivel oficial se reconoce que “el proyecto de expansión del Mercosur enfrenta dificultades”, pero que su perfil integracionista no se ha modificado, según sostiene Brun Bath del Departamento de Comercio de la Cancillería brasileña. El Canciller interino de Uruguay Roberto Rodríguez, por su parte, reconoció que hubo “circunstancias que han repercutido” en la marcha del bloque pero que mantiene con toda fuerza su proyección política.

Mientras en el frente interno el bloque enfrenta dificultades, con la Unión Europea ha mostrado interés político y comercial, y se prepara para recibir a los jefes de Estado en una Cumbre a finales de junio en Río de Janeiro. La expectativa del Mercosur es que los presidentes dejen un mandato que les permita comenzar las negociaciones para una zona de libre comercio EU-Mercosur hasta el 2001. La Unión Europea es el origen de cerca del 43% de la inversión extranjera directa en la región y reportó en 1998 un comercio bilateral con el Mercosur de 55 billones de dólares. Los 160 billones de dólares en subsidios a la agricultura que mantiene la UE, conjuntamente con las restricciones sanitarias y fitosanitarias que impone en el acceso a su mercado siguen siendo las trabas más grandes.

El Mercosur ha demandado que cualquier acuerdo con la UE deberá incluir concesiones significativas sobre la agricultura, lo cual resulta poco probable hasta la fecha, motivo por el cual el canciller argentino Guido Di Tella, calificó como “disparate” al referirse a los subsidios que utiliza la UE para sostener a los productores agropecuarios, y advirtió que no se deben esperar grandes resultados de la Cumbre de Mandatarios en junio, y que tal reunión “despertó un gran entusiasmo

que excede al realismo”, ya que “un acuerdo significa atravesar un camino muy complicado”.

Pese a que todo indica que la región recobra un dinamismo perdido en los últimos cinco meses, el panorama es aún incierto. La inminencia de las elecciones nacionales en Argentina y Uruguay ha traído al Mercosur gran expectativa, lo que ha determinado una estrategia de espera en Brasilia, hasta saber quien conducirá a Argentina en los próximos cuatro años, para retornar con esa conducción a las negociaciones sobre todos los puntos complejos pendientes.

Rápido avance en las negociaciones entre Brasil y CAN

Los Representantes de los Gobiernos de los Países Miembros de la Comunidad Andina y del gobierno brasileño se reunieron en la ciudad de Lima, del 12 al 15 de mayo, para continuar las negociaciones de un Acuerdo de Preferencias Arancelarias Fijas.

La delegación brasileña estuvo coordinada por el Director General del Departamento de Integración Latinoamericana del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministro José Antonio Marcondes de Carvalho. Por su parte la Delegación de la Comunidad Andina estuvo coordinada por la Directora de Negociaciones del Ministerio Exterior de Colombia, María Eugenia Mesa Ruiz.

En el transcurso de la reunión, la Comunidad Andina hizo entrega de su posición respecto a todos los productos pendientes; una contrapropuesta de Requisitos Específicos de Origen para el sector textil y confecciones; y un proyecto de texto normativo para el Acuerdo a suscribirse. Las delegaciones mantuvieron un intercambio de posiciones sobre ambas propuestas, con miras a concluir su consideración en la próxima reunión.

Después de intensas negociaciones se logró avanzar en todos los sectores involucrados, y fueron acordadas aproximadamente 800 nuevas subpartidas, con las que se tendrían preliminarmente acordadas 2100 subpartidas, lo que representa alrededor del 75% de los productos en negociación.

Al finalizar la reunión, ambas delegaciones reiteraron su voluntad de concluir la negociación antes del 30 de junio y acordaron efectuar su próxima reunión del 1 al 4 de junio, en Lima en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Reuniones sobre acuerdos de inversión en las Américas

El Grupo de Negociaciones de Inversión del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se reunió en Miami, EE.UU., del 20 al 23 de abril, en el marco de una serie de reuniones que el grupo viene celebrando desde enero pasado, y que culminará en agosto de 1999 con el propósito de establecer su agenda.

Paralelamente a esta reunión, coordinada por el Centro Internacional de Derecho Ambiental (CIEL), el día miércoles 21 se realizó un encuentro entre organizaciones de la sociedad civil y representantes de gobierno y miembros del Grupo de Negociación de Inversión. Asistieron al encuentro representantes de varias organizaciones no gubernamentales como Women's Edge, Public Citizen, Common Frontiers, CIEL y el Centro Norte Sur de EE.UU., y CEDARENA de Costa Rica. Los representantes de gobierno de EE.UU., Trinidad y Tobago, Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Argentina, Venezuela y Panamá también asistieron al encuen-

tro. La actividad consistió fundamentalmente en un panel en el que se expusieron los peligros que implicaría la desregulación de la inversión en el Hemisferio Occidental para la estabilidad económica y la equidad en la región, así como para los esfuerzos en la promoción del desarrollo sostenible.

La inquietud de las organizaciones de la sociedad civil por la agenda de inversión dentro de las negociaciones del ALCA aumenta debido a recientes indicaciones de que los aspectos sociales y ambientales relacionados con la inversión no recibirán el tratamiento adecuado, y no habrá procesos de consulta en su negociación. Por ello los panelistas recalcaron las recientes experiencias con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el proyecto de un Acuerdo Multilateral sobre Inversión (AMI) de la OCDE.

El 19 de abril, antes de la reunión del Grupo de Negociaciones, grupos de la sociedad civil del hemisferio presentaron al Grupo una carta “informando a los gobiernos, temprano en el proceso de negociación, que la sociedad civil se opondrá a los esfuerzos por desarrollar un acuerdo de inversiones al estilo AMI o TLCAN en el ALCA”, citando preocupación por “su posible efecto en procedimientos democráticos, el desarrollo económico, la estabilidad financiera, la protección ambiental y los derechos humanos”. Además, manifestaron su oposición a “la adopción de las disposiciones sobre solución de diferencias entre Estados e inversores como centro de un acuerdo de inversiones”, calificando las mismas como “una forma cerrada mediante la cual ciertas compañías pueden evitar los canales políticos y legales y atacar a las leyes democráticamente establecidas”.

Las negociaciones del ALCA estarían basándose en estos documentos, y contendrían las mismas limitaciones. Las disposiciones del TLCAN y el AMI sobre la definición de inversión, transferencias y trato nacional restringen de forma importante la potestad de los gobiernos de regular los flujos de capital especulativos a corto plazo, aún cuando sea para prevenir o manejar una crisis financiera y protegerse de la volatilidad de los mercados financieros globales. Tales principios expanden los derechos de las empresas transnacionales sin crear ninguna obligación como contrapartida, limitan la capacidad de los gobiernos y de la ciudadanía para establecer políticas nacionales de desarrollo económico y social y de protección del medio ambiente, recalcó Roberto Bissio del Instituto del Tercer Mundo.

Por su parte, el CIEL agregó que un acuerdo de inversiones no debe estar vinculado a un acuerdo de libre comercio, y el objetivo real de un acuerdo de este tipo debe ser el desarrollo de un marco legal sobre inversión que promueva los objetivos del desarrollo sostenible, mediante la transferencia de tecnología, entre otros. Esta organización recomendó que los gobiernos evalúen las inversiones extranjeras directas y las reglas multilaterales propuestas para determinar los impactos económicos sociales y ambientales antes de que estos gobiernos diseñen un nuevo acuerdo sobre inversiones. Esta organización considera que deben establecerse límites en las disposiciones sobre la definición de expropiación a la posesión física de la propiedad del inversor y sujetar la expropiación a las leyes del país anfitrión, asegurando que tales disposiciones sobre expropiación no dejen a la ciudadanía desamparada al limitar los poderes tradicionales del gobierno para proteger la salud, la seguridad y el medio ambiente.

Informe elaborado por Lic. Vicky Cajiao del Centro de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales, Costa Rica. Tel: (506) 283-7080, fax: (506) 224-1426, e-mail: cedarena@sol.racsca.co.cr

Los Principios de Winnipeg y el Mercosur

Durante los días 8, 9 y 10 de abril de 1999 se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, el Taller sobre los “Principios de Winnipeg y Mercosur”. El evento fue organizado por el Instituto de Estudios Ambientales

de la Universidad Libre de Amsterdam, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

El objetivo de este taller fue abrir un espacio para la presentación de trabajos de investigación acerca de puntos estratégicos a tomar en cuenta al considerar las relaciones entre integración comercial y desarrollo sostenible en el ámbito del Mercosur.

Con la exposición de los trabajos de varios investigadores y el aporte de destacados funcionarios de medio ambiente de los países del Mercosur se analizó la situación de la región a la luz de los siete principios de Winnipeg: eficiencia, integridad ambiental, equidad, cooperación internacional, ciencia y precaución, transparencia y subsidiariedad. Asimismo se presentó un análisis comparativo entre el Mercosur, la Unión Europea y el TLCAN sobre políticas ambientales, aplicación y resolución de conflictos.

Para mayor información: María Inés Nicolini, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), Buenos Aires, Argentina. Tel: (54-1) 788-4266 / 787-3820, e-mail: info@farn-sustentar.org

CCPC recomienda no modificar normas sobre peticiones ciudadanas

En su última reunión celebrada en la Ciudad de México en abril, el Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) decidió recomendar al Consejo de Ministros de la Comisión para la Cooperación Ambiental que el procedimiento para la presentación de peticiones (denuncias) ciudadanas no sea modificado. Esta recomendación surgió después de que el CCPC, a pedido del Consejo de Ministros, hiciera una consulta pública para conocer qué opinaba la sociedad sobre la propuesta de reformas a las Directrices para la presentación de peticiones ciudadanas en contra de cualquiera de los tres gobiernos cuando alguna persona u organización no gubernamental considere que estos no están aplicando su legislación ambiental de manera efectiva. En la consulta, organizaciones de la sociedad civil en los tres países se pronunciaron mayoritariamente en contra de dichas reformas.

Para mayor información, contactar a: Ana Karina González del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Tel: (525) 211-2457 / 286-3323, fax: 211-2593, e-mail: cemda@laneta.apc.org

Seminario sobre integración, comercio y ambiente en Costa Rica

El Centro Internacional de Políticas Económicas (CINPE) de Costa Rica, organizó el Seminario Internacional: Integración, Comercio y Ambiente los pasados 8 y 9 de abril en San José. El objetivo principal del seminario fue debatir los principales elementos de la agenda de negociación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que pudieran servir de enlace entre el desarrollo del comercio exterior y el uso sostenible de los recursos naturales y ecosistemas compartidos.

En el seminario se plantearon cuatro mesas de trabajo: 1) Factores que obstaculizan el desarrollo y la inclusión del tema ambiental en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); 2) El estilo de desarrollo centroamericano y el papel de los recursos naturales; 3) La relación entre la competitividad internacional en tiempos de apertura y las medidas ambientales; 4) El papel de los acuerdos multilaterales ambientales y su impacto en los flujos internacionales y de inversión.

Para más información: www.inca.or.cr

La CRGAA de la FAO necesita más tiempo para concluir la revisión del Compromiso Internacional

La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA) de la FAO, antes conocida como la Comisión de Recursos Fitogenéticos, se reunió por octava ocasión del 19 al 23 de abril en Roma para continuar el análisis y la revisión del Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos con el propósito de armonizar el mismo con las disposiciones del Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992. El Compromiso Internacional es un acuerdo sobre el acceso e intercambio de germoplasma para el mejoramiento de plantas, adoptado por la FAO oficialmente en 1983, el mismo que comprende un Plan de Acción Mundial; una Red Internacional de Recursos Fitogenéticos; un Sistema Multilateral de Acceso y Reparto de Beneficios; y, los Derechos de los Campesinos.¹

Los 161 países representados en la Comisión progresaron sobre el texto de negociación, pero no lo suficiente como para concluir las negociaciones, como se había esperado. A pesar de que las posiciones ya no son tan opuestas como en anteriores reuniones, las discusiones se han extendido a una o más reuniones adicionales del Grupo de Contacto del Presidente, con un nuevo plazo, noviembre del año 2000, para finalizar las negociaciones del Compromiso Internacional.

Una de las cuestiones más debatidas durante las discusiones se refería a la cobertura adecuada de la lista de plantas a ser incluidas dentro del Sistema Multilateral de Acceso y Reparto de Beneficios. En otro aspecto, el Grupo de Contacto acordó el lenguaje sobre derechos de los campesinos; sin embargo, algunos países y la mayoría de las ONGs esperan retomar este asunto en la próxima reunión del Grupo, argumentando que el lenguaje es débil y hace que los derechos de los campesinos queden expuestos a legislación nacional, lo que muchas ONGs consideran un retroceso en relación a la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV - Protección de las Obtenciones Vegetales) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Adicionalmente, se identificó la necesidad de que la Secretaría de la Comisión presente un informe en la próxima reunión sobre el estado de los textos de los proyectos "Código de Conducta de la Biotecnología en relación a los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura" y "Código de Conducta para la Recolección y Transferencia de Germoplasma", en vista de los posibles riesgos que puede implicar los avances de la biotecnología.²

Para mayor información, contactar a: José Esquinas-Alcazar, FAO. Tel: (39-06) 52251, fax: 522-3152, e-mail: jose.esquinas@fao.org, o consultar los documentos de la Comisión disponibles en la página electrónica de la FAO: <http://www.fao.org/ag/cgrfa/docs8.htm>

Continúa negociación de Protocolo de Responsabilidad del Convenio de Basilea

Del 19 al 23 de abril se reunió en Ginebra el Grupo de Negociación Ad-Hoc a cargo de la preparación del Protocolo de Responsabilidad del Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación. Pese a que se registraron progresos sustantivos en esta reunión, el instrumento no pudo finalizarse.

Los delegados concordaron en la clase de daños que se deberá compensar, así como en las disposiciones sobre responsabilidad objetiva, que se aplicarían en lugar de un sistema de responsabilidad basada en la

culpa. La responsabilidad se extenderá a partir del momento en que el desecho es cargado para transporte hasta que la disposición del mismo sea completada; adicionalmente, las partes responsables deben estar cubiertas por un seguro u otra clase de garantía financiera.

Todavía existen diferencias sobre: a) cómo se debe determinar la responsabilidad objetiva; b) si debe establecerse un techo financiero para el reclamo de daños; c) si debe establecerse un fondo internacional para cubrir las operaciones de limpieza hasta que sea identificada la parte responsable; y, d) el desarrollo de medidas de emergencia. De acuerdo con el texto preliminar, la compensación por el derrame de desechos peligrosos podría reclamarse hasta 10 años después del incidente, pero todavía no se ha acordado quien debe pagarla: el generador del cargamento, el exportador, o el agente a cargo del cargamento en el momento del accidente.

El Protocolo sería el primer instrumento jurídico adoptado en un acuerdo multilateral sobre medio ambiente que trata sobre responsabilidad y compensación. Es probable que una reunión especial se organice en septiembre para finalizar el texto, y se espera que los gobiernos adopten el mismo en la V Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea, previsto para el 6-10 de diciembre de 1999.

Contacto: Iwona Rummel-Bulska, Secretaría del Convenio. Tel: (41-22) 979-9111, fax: 797-3454, e-mail: bulskai@unep.ch

Poco avance sobre comercio y medio ambiente en el III Período de sesiones del Foro Intergubernamental sobre los Bosques

El III Período de sesiones del Foro Intergubernamental sobre los Bosques (IFF-3, por sus siglas en inglés), se reunió en Ginebra del 3 al 14 de mayo, bajo el auspicio de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) de las Naciones Unidas, para continuar con el diálogo que comenzó con el Grupo Intergubernamental sobre los Bosques en 1995 sobre la adopción de mecanismos vinculantes para facilitar y promover el uso sostenible de los bosques. Uno de los temas principales del programa del Grupo se refería a cuestiones de comercio y medio ambiente relacionadas con productos y servicios forestales. Terminado el mandato del Grupo en 1997, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas decidió establecer un grupo ad-hoc abierto - el IFF - en la órbita de la CDS para continuar el diálogo intergubernamental sobre políticas forestales, donde se restableció el grupo de trabajo sobre comercio y medio ambiente.

Durante esta última reunión del IFF en Ginebra, los delegados no lograron avanzar en las discusiones sobre comercio y medio ambiente, a pesar de que, algunos comentaron, el solo hecho de que los delegados hayan acordado un texto preliminar es un logro. Algunos observadores dijeron que estos diálogos de cierta forma anticipan eventuales negociaciones sobre productos forestales en la OMC, con los países en desarrollo exportadores presionando para mejorar el acceso a mercados de sus productos, y los países desarrollados alegando que las discusiones arancelarias están más allá de la capacidad del IFF. Otros importadores de productos forestales instaron al desarrollo de medidas comerciales para apoyar el manejo sostenible de bosques. Mientras algunos países desarrollados se opusieron a incluir alguna referencia a la liberalización del comercio en el texto, los países en desarrollo argumentaron que es esencial para promover el manejo sostenible de bosques y sería necesario resolver esta discrepancia para poder llegar a un consenso. Las divisiones Norte-Sur también se hicieron evidentes en las discusiones sobre los vínculos con la Convenio sobre la Diversidad Biológica para asegurar financiamiento relacionado con la transferencia de tecnología y los conocimientos tradicionales sobre bosques. Los países desarrollados se opusieron a tal vínculo.

El IV Período de sesiones del IFF se celebrará del 31 de enero al 11 de febrero del 2000 en Nueva York.

Continúa en la página 10

¹ Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología. "Informe de Participación en la Reunión de la CRGAA/FAO". Documento preparado por Jaime Estrella E., Ph.D. Quito, 1999.

² Ibid.

MSD, continuado de la página 6

mas políticas que a los naturales de EE.UU. También encontró que al usar la certificación país por país en lugar de embarque por embarque, EE.UU. parecía estar mas “preocupado por influenciar efectivamente” las políticas internas de otros países, que en asegurar que el camarón importado sea capturado con métodos que no dañen a las tortugas marinas en peligro.

Influenciar las políticas internas de otros países, es ciertamente un objetivo de las organizaciones conservacionistas involucradas en el caso. EE.UU. inicialmente aplicó la Sección 609 de una manera que permitía la certificación de importaciones tanto embarque por embarque, como país por país.

En 1996, organizaciones conservacionistas desafiaron exitosamente esta interpretación ante la Corte de Comercio Internacional. La Corte aceptó que la certificación embarque por embarque no era suficiente para cumplir con el propósito de la Ley (protección efectiva de tortugas marinas amenazadas), e instruyó a la Administración a importar camarón marino solo de los países que estuvieran certificados y que tienen y aplican legislación que obliga el uso de TEDs, si las capturas ocurren dentro de sus aguas territoriales. El caso de la certificación país por país vs. la de embarque por embarque ha sido apelado por las partes en varias ocasiones.

La certificación embarque por embarque es uno de los elementos claves de la aplicación del plan del Gobierno de EE.UU. sobre las decisiones del Organo de Apelación la OMC, en el embargo de camarón. Antes de que éste se pronuncie definitivamente a finales de julio, la Corte de Comercio Internacional ha requerido detalles sobre los efectos de experiencias anteriores sobre certificación embarque por embarque, así como comentarios públicos recibidos por el Departamento de Estado sobre los lineamientos publicados en marzo. Si la Corte ordena al Gobierno retornar a la certificación país por país exclusivamente, es probable que el Departamento de Estado apele el veredicto. EE.UU. debe cumplir con las decisiones de la OMC hasta el 6 de diciembre de 1999, y se espera que presente su plan de aplicación a los Miembros de la OMC en mayo.

AMUMAs, continuado de la página 9

Foro Global sobre Biodiversidad y Convención de Ramsar se reúnen en Costa Rica

El XIII Período de sesiones del Foro Global sobre Biodiversidad (GBF-13, por sus siglas en inglés) se reunió del 7 al 9 de mayo en San José, Costa Rica, previo a la VII Reunión de las Partes de la Convención sobre Humedales (Convención de Ramsar) que se llevó a cabo del 10 al 18 de mayo en la misma ciudad.

La Decisión III/21 del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) adoptada en 1996, designó a la Convención de Ramsar como un socio principal en asuntos relacionados a humedales. Asimismo el Artículo 8 de la Convención de lucha contra la desertificación llama a la cooperación con otras convenciones como Ramsar y el CDB, para que la aplicación de actividades y los arreglos institucionales se apoyen mutuamente. Estos ejemplos de asociaciones estratégicas resaltan la necesidad de definir actividades complementarias y prácticas que puedan contribuir a mantener los sistemas ecológicos, su productividad, biomasa y biodiversidad.

El GBF-13 se centró en el desarrollo de mecanismos para aplicar efectivamente el Plan de Trabajo Conjunto entre la Convención de Ramsar y el CDB que fue adoptado durante la IV Reunión de las Partes del CDB en mayo de 1998. El GBF-13 también discutió las sinergias entre la Convención de Ramsar y otras convenciones relacionadas con la biodiversidad, como son la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y la Convención de lucha contra la desertificación, en cuestiones relacionadas a la conservación de la biodiversidad en ecosistemas de aguas interiores y en zonas marinas y costeras.

Por su lado, la Conferencia de las Partes de la Convención de Ramsar logró un avance importante con la adopción de una variedad de herramientas para la aplicación de la Convención. Además, se discutieron algunos temas que tienen un impacto sobre la conservación de humedales, entre ellos el asunto del efecto del calentamiento global, la política y el manejo de ríos y sistemas hídricos, la participación de la comunidad a todo nivel, las herramientas que se utilizan para evaluar y reconocer los diferentes valores de los humedales y la estructura regional y de cooperación internacional con respecto a humedales y recursos hídricos compartidos.

En la GBF-13 resultó particularmente interesante el taller sobre humedales y el sector privado, ya que la mayor parte de humedales se encuentra en manos privadas. El taller exploró el papel del sector privado en la utilización prudente de humedales, particularmente en las industrias de pesca, turismo, energía y transporte. Se identificó la necesidad de establecer asociaciones estratégicas entre organismos comunitarios, empresas privadas, terratenientes y gobiernos locales.

Durante el evento, se reconoció el papel vital del sector privado en apoyo a la Convención de Ramsar en el desarrollo de incentivos adecuados y de un marco institucional para su aplicación. Se discutieron en detalle sugerencias e ideas de incentivos que podrían mejorar el papel del sector privado para la conservación y el uso prudente de humedales, que se acordó deberían estar diseñados bajo un entendimiento integral sobre la dimensión transfronteriza, el contexto global institucional y las necesidades a nivel local.

Entre los incentivos se mencionaron: el desarrollo de una estrategia de comunicación y educación sobre el tema para el sector privado; incentivos financieros y económicos (como permisos transables, esquemas de aplicación conjunta, créditos de exportación, regalías, préstamos gubernamentales, la eliminación de subsidios distorsivos, subsidios positivos), incentivos jurídicos y políticos (como multas sobre la contaminación, zonificación y contingentes comercializables), y otros mecanismos, como la certificación y eco-etiquetado, entre otros. Además, se recomendó que la Convención de Ramsar desarrolle una campaña de comunicación y educación dirigida al sector privado para reducir el vacío de información que tiene sobre el tema.

El taller sobre Mitigación del Impacto de Especies Invasoras concluyó que una de las principales causas del incremento de este fenómeno es el crecimiento en el comercio y el transporte internacional, por lo que se debe concienciar las organizaciones de comercio y a la industria del transporte sobre el papel que desempeñan en la prevención de la introducción de especies invasoras.

La próxima reunión del GBF será del 18 al 20 de junio en Montreal, Canadá. La próxima Conferencia de las Partes de la Convención de Ramsar se llevará a cabo en el 2002 en España.

Información del Instituto de Recursos Mundiales, Washington, DC, EE.UU. y de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). Para mayor información, contactar a: Nadene Canning Wacker, GBF-13-San José, UICN, Gland, Suiza. Tel: (41-22) 999-0001, fax: 999-0025, e-mail: ncw@hq.iucn.org

¿Cómo proteger el sistema de la OMC de los ‘infractores persistentes’?

Por Ernst-Ulrich Petersmann

Cuando la Disposición No. 404/93 del Consejo de la Comunidad Europea (CE) sobre la organización común del mercado del banano fue adoptada en febrero de 1993, sus aparentes inconsistencias con las obligaciones en el marco del GATT fueron criticadas aún dentro de la misma CE. Estas inconsistencias fueron confirmadas subsiguientemente en un número sin precedentes de informes del mecanismo de solución de diferencias del GATT y la OMC:

- el Panel del GATT de 1993 sobre el *Régimen de importación de banano de los estados miembros de la CEE* (DS32/R) concluyó que, además de la inconsistencia de las cuotas nacionales de importación con el Artículo XI del GATT, los aranceles preferenciales de la CE para el banano de los países ACP eran violatorios del Artículo I;
- el informe del Panel del GATT de 1994 sobre el *Régimen de Importación del banano – CEE* (DS38R) halló inconsistencias con los artículos I, II y III;
- los cuatro informes de Paneles de la OMC en 1997 sobre el *Régimen de importación, venta y distribución de banano – CE* (WT/DS-27/R/Ecuador, Guatemala-Honduras, México, EE.UU.) estableció la existencia de inconsistencias con los Artículos I, III, X y XIII del GATT, con el Artículo I del Acuerdo sobre Licencias, y los Artículos II y XVII del GATS; el informe de 1997 del Órgano de Apelaciones (WT/DS27/AB/R) en general confirmó las conclusiones de los Paneles anteriores;
- la decisión arbitral de la OMC de 1998 (WT/DS27/15) decidió que el ‘período razonable de tiempo’ para adecuar el régimen de importación del banano de la CE a las normas de la OMC expiraba el 1 de enero de 1999.
- la decisión arbitral (WT/DS27/ARB) y los dos informes de paneles (WT/DS27/RW/ECU y /EEC) del 9 y 12 de abril de 1999.

A lo largo de seis años de sucesivos procedimientos, innumerables reuniones en el GATT y la OMC intentaron en vano incitar a la CE a adecuar sus restricciones a la importación de banano a sus obligaciones en ambos regímenes. ¿Dónde estuvo la falla? ¿Necesita la OMC nuevas reglas e incentivos para dotar a sus normas de mayor efectividad? ¿Cómo puede el ciudadano interesado en el libre comercio y el imperio de la ley estar mejor protegido del ‘secuestro’ del proceso de formulación de política comercial por parte de grupos de interés que persiguen maximizar sus propios beneficios?

El problema constitucional: El imperio de la ley debe comenzar en casa

Ni el derecho internacional ni la política exterior pueden entenderse sin tomar en cuenta los ordenamientos jurídicos y políticos nacionales que enmarcan la formulación de políticas. Se ha reconocido desde hace tiempo en el derecho de la CE que los convenios internacionales firmados por la misma, como los acuerdos de la OMC, son parte integral de su ordenamiento jurídico y tienen primacía sobre la ‘normas secundarias’ adoptadas por las instituciones comunitarias. Tanto el Tratado de la CE como el Acuerdo de la OMC fueron ratificados por los parlamentos nacionales de los 15 Estados Miembros sin otorgar a las institucio-

nes comunitarias autorización para infringir el derecho internacional. Las frecuentes conclusiones del mecanismo de solución de diferencias en el GATT y la OMC sobre la violación de sus normas reflejan un ‘problema constitucional’ que debe tomarse en cuenta en el proceso de fortalecimiento de un régimen jurídico internacional que juegue en beneficio de todos los ciudadanos:

- ¿Por qué la mayor parte de los 100 actos jurídicos de las instituciones de la CE relativos a la aplicación, desarrollo y reforma del régimen de importación de banano pudieron ignorar persistentemente no sólo las normas del GATT/OMC sino también la disposición del ‘tratado constitutivo’ de la CE que prescribe que los acuerdos internacionales “serán obligatorios para las instituciones de la Comunidad y los Estados Miembros” (Artículo 300)?
- ¿Por qué la Corte de Justicia de la CE no ha tomado en cuenta las normas del GATT/OMC en sus más de 40 fallos sobre demandas de Estados Miembros y ciudadanos afectados contra las restricciones obviamente ilegales sobre la importación de banano?
- ¿Por qué el Tratado de la CE (Artículo 133) no prevé el control parlamentario de los acuerdos comerciales concluidos por la CE, como el ‘Acuerdo Marco’ de 1994 que la CE suscribió con algunos países exportadores de banano en clara violación del Artículo XIII del GATT?

Los laudos arbitrales de la OMC en la disputa del banano en abril de 1999 (...) confirman que el ESD sigue funcionando como un marco para el desarrollo de políticas basadas en normas y no en la fuerza.

- ¿Cómo pueden los ciudadanos protegerse más efectivamente de futuras violaciones de las normas de la OMC y la CE por las que ‘rentas proteccionistas’ en el orden de los miles de millones de dólares anuales son redistribuidas en beneficio de unos pocos comerciantes de banano políticamente influyentes, a expensas de los consumidores de la CE y los productores de banano más eficientes en países en desarrollo, sin una base legal ni legitimidad democrática en el derecho comunitario, y que produce sólo beneficios marginales para los productores y exportadores de banano en los países menos desarrollados del ACP?

La necesidad de clarificar y fortalecer el ESD

El gran número de invocaciones del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) desde su entrada en vigor en 1995 (unas 168 a abril de 1999) es ampliamente reconocido como un voto de confianza en el sistema de solución de diferencias de la OMC. Los laudos arbitrales de la OMC en la disputa del banano en abril de 1999, y el compromiso explícito de todas las partes de cumplir con sus obligaciones confirman que el ESD sigue funcionando como un marco para el desarrollo de políticas basadas en normas y no en la fuerza. No obstante, los resultados de los paneles y los arbitrajes de abril de 1999 ilustran la necesidad de clarificar y fortalecer algunas disposiciones del ESD, particularmente el Artículo 21, relativo a la aplicación de decisiones sobre soluciones a controversias, y el Artículo 22 sobre suspensión de concesiones. Por ejemplo:

- Si hay desacuerdo sobre la existencia o consistencia de medidas tomadas para cumplir con las recomendaciones y decisiones en términos del Artículo 21.5 del ESD con un acuerdo abarcado, ¿en qué condiciones puede tal disputa ser sometida al procedimiento de paneles previsto en el Artículo 21.5 antes de que culmine el ‘plazo prudencial’ para permitir el cumplimiento con los derechos, obliga-

ciones y plazos del Artículo 22.6, (“el OSD, previa petición, concederá autorización para suspender concesiones u otras obligaciones dentro de los 30 días siguientes a la expiración del plazo prudencial, a menos que decida por consenso desestimar la petición”)?

- ¿Se refiere la mención del Artículo 21.5 al recurso a “los presentes procedimientos de solución de diferencias” también a las disposiciones del ESD sobre consultas (Artículo 4), adopción de los informes de los grupos especiales (Artículo 16) y el examen en apelación (Artículo 17)? ¿O es esta interpretación literal inconsistente con la naturaleza expedita y los objetivos de las disposiciones del ESD sobre “pronto cumplimiento” (Artículo 21) y sobre compensaciones o autorización de suspensión de concesiones dentro de los 30 días de expiración del plazo prudencial (Artículo 22)?
- Si no se ha determinado en procedimientos de paneles anteriores (según el Artículo 21.5) que un Miembro “no pone en conformidad con un acuerdo abarcado la medida declarada incompatible con él o no cumple de otro modo las recomendaciones y resoluciones adoptadas dentro del plazo prudencial”(Artículo 22.2), ¿puede el demandante recurrir directamente al Artículo 22.2 y “dentro de los 20 días siguientes a la fecha de expiración del plazo prudencial [...] pedir la autorización del ESD para suspender la aplicación al Miembro afectado de concesiones u otras obligaciones resultantes de los acuerdos abarcados”? ¿O son las alegaciones unilaterales de incumplimiento con las obligaciones de la OMC, también en el contexto del Artículo 22.2 del ESD, inconsistentes con el principio de que no se formularán determinaciones de que se ha producido una infracción de la normativa de la OMC excepto “de forma coherente con las constataciones que figuren en el informe del grupo especial o del Organo de Apelación adoptado por el OSD, o en el laudo arbitral dictado con arreglo al presente Entendimiento” (Artículo 23)?
- ¿Permite el arbitraje del Artículo 22, sin perjuicio de la definición estricta de su objeto en los párrafos 6 y 7, que los árbitros decidan también sobre la consistencia con las normas de la OMC de las medidas de aplicación? ¿Cómo asegurar que tales laudos arbitrales sean consistentes con decisiones previas o posteriores del Organo de Apelaciones según el Artículo 21.5 sobre la consistencia con la OMC de las medidas de aplicación?
- ¿Hay necesidad de reglas más precisas para evitar conflictos sobre el principio de que “[e]l nivel de suspensión de concesiones u otras obligaciones autorizado por el OSD será equivalente al nivel de la anulación o menoscabo” (Artículo 22.4)? ¿Cómo puede calcularse objetivamente el potencial comercial perdido?
- ¿Se aplica la regla del consenso negativo del Artículo 22.6 sólo dentro de los plazos especificados en ese artículo?
- ¿Puede el país demandado iniciar por sí mismo un procedimiento de panel según el Artículo 21.5 para asegurar, p.ej., el cumplimiento del Artículo 22.8 (“[l]a suspensión de concesiones u otras obligaciones será temporal y sólo se aplicará hasta que se haya suprimido la medida declarada incompatible con un acuerdo abarcado”) si se mantienen las contramedidas a pesar de alegar el demandado que la medida violatoria ha sido ajustada a las normas de la OMC?

Valor limitado del laudo arbitral como precedente

Durante la negociación en la Ronda Uruguay de los Artículo 21 y 22 del ESD, las cuestiones mencionadas arriba fueron dejadas abiertas en

vista de las limitaciones temporales y la incertidumbre de las negociaciones. El laudo arbitral de abril de 1999 responde a alguna de ellas con interpretaciones que son convincentes en el contexto especial de la disputa del banano. Por ejemplo, los árbitros reconocieron que “nuestra tarea no es examinar la relación de los Artículos 21.5 y 22 del ESD”, pero concluyeron, correctamente, que su mandato para decidir sobre la equivalencia entre la suspensión de concesiones propuesta y el grado de anulación o menoscabo, y de encontrar una salida lógica para coordinar los procedimientos simultáneos de panel y arbitraje, sin perjuicio de sus diferentes plazos, también requiere un examen de la consistencia con la OMC del régimen revisado de la CE.

Sin embargo, la interpretación que se hizo para esta disputa no prejuzga sobre la futura coordinación de los procedimientos de paneles del Artículo 21.5 y los de arbitraje del Artículo 22.6 de manera que sus plazos (90 días según el 21.5 y 30-60 días según el 22.6) y sus funciones específicas puedan conciliarse.

Necesidad de fortalecer el acceso a los tribunales nacionales

La revisión del ESD en marcha debería llevar a una interpretación acordada de los Artículos 21 y 22 que aumente los incentivos para cumplir con las decisiones del mecanismo de solución de diferencias. Rondas futuras de la OMC no deberían ignorar la idea de que el imperio de la ley debe comenzar en casa. Los más de seis años de experiencia en procedimientos de solución de diferencias en el GATT y la OMC sobre el régimen del banano y su enorme costo económico y político podrían haberse evitado si la Corte de Justicia de la CE y los tribunales nacionales de sus países miembros – en los múltiples procesos judiciales iniciados por los Estados Miembros de la CE y comercializadores de banano – se hubieran ceñido a la legalidad y conformado sus decisiones a las obligaciones de la CE en el GATT y la OMC.

Las normas de la OMC contienen garantías de acceso individual a los tribunales nacionales. Fortalecer estas normas – permitiendo que los ciudadanos afectados invoquen y apliquen, a través de los tribunales nacionales, las garantías precisas e incondicionales de la OMC de libertad y no-discriminación – continúa siendo el mecanismo más efectivo y democrático de aplicación de las normas y para responsabilizar a los gobiernos si ignoran las reglas ratificadas por los parlamentos nacionales.

El *Primer informe sobre las denuncias de fraude, mal manejo y nepotismo en la Comisión Europea*, publicado por el Comité de Expertos Independientes a pedido del Parlamento Europeo el 15 de marzo de 1999 enfatiza otro problema constitucional: “Se está volviendo difícil encontrar alguien que tenga un mínimo sentido de la responsabilidad” (para. 9.4.25). Mientras los gobiernos impidan que sus ciudadanos y tribunales defiendan la legalidad en sus propios países, el sistema legal y de solución de diferencias de la OMC continuará viéndose confrontado con numerosos ‘conflictos secundarios’ entre gobiernos, que son derivaciones de fallas en los procesos nacionales de reducción de beneficios y la inadecuada protección del imperio de la ley al interior de los sistemas legales domésticos.

Es hora de que los miembros de la OMC protejan más efectivamente, en el marco de la normativa de la OMC y la nacional, el derecho democrático de sus ciudadanos a un estado de derecho y el acceso de los individuos a los tribunales frente a los abusos francamente ilegales de las autoridades regulatorias.

Ernst Ulrich Petersmann es profesor de la Universidad de Ginebra y ex-asesor jurídico de la OMC, el GATT y el Ministerio de Asuntos Económicos de Alemania.

Cuestiones sustantivas

Como se indicó arriba, respondiendo a cambios sustanciales en la economía mundial, el programa de trabajo de la OMC ha venido incorporando temas que van más allá de los que tradicionalmente dominaban el GATT hasta el comienzo de la Ronda Uruguay. Así, por ejemplo, el comercio internacional de servicios es ahora tan importante como el de manufacturas, productos agrícolas y materia prima. Por otra parte, las ventas anuales de las filiales extranjeras de las empresas multinacionales (en el orden de US\$ 7 trillones) exceden el monto total de las exportaciones mundiales (que rondan los US\$ 6 trillones). También es patente la creciente importancia de los acuerdos comerciales regionales, incluyendo acuerdos sobre inversiones.

La creación de la OMC como una institución con reuniones ministeriales bienales ha sumado una dimensión política a un sistema que estaba signado por el carácter más bien técnico de los representantes gubernamentales. Este giro en el régimen internacional ha abierto el sistema de comercio a los parlamentos y organizaciones de la sociedad civil, entre otras razones, porque el sistema ahora exige la aceptación de disciplinas que inciden con más rigor en el ejercicio de la soberanía nacional.

La Primera Reunión Ministerial de la OMC (Singapur, 1996) representó un paso más en esta dirección al vincular de manera explícita el comercio a temas controvertidos como inversión, política de competencia, transparencia en contrataciones del sector público, facilitación del comercio, normas laborales y medio ambiente, estableciendo el compromiso de abordarlos, a más de los que ya estaban en la agenda.

¿Qué temas podrían entrar en una ronda multilateral? ¿Podría este espacio absorber algunas de las negociaciones que vienen de la Ronda Uruguay?

La UE ha manifestado, a través del anterior Presidente de la Comisión, que "en el curso de una nueva ronda de negociaciones, la Comunidad prevé que se aborden especialmente el programa de trabajo, la cuestión del comercio y el medio ambiente, los temas escogidos en Singapur, los aranceles industriales y los obstáculos no arancelarios". La UE insiste en que deben incluirse los temas que los países en desarrollo quieran negociar, para ampliar el espectro de lo negociable y así permitir un mayor número de concesiones mutuas.

También decidido a continuar con el proceso de liberalización, aunque no necesariamente a través de una ronda multilateral como la Ronda Uruguay, EE.UU. ha expresado su deseo de ver incluidos temas como el ambiental, el laboral, y las contrataciones del sector público. Este país todavía duda sobre la conveniencia de incluir la política de competencia, en tanto que la UE es un firme promotor de su tratamiento. EE.UU. y Canadá anunciaron que buscarían incluir como tema de negociación el comercio de productos biotecnológicos – una decisión que debe vincularse tanto a las disputas que mantienen con la UE sobre sus exportaciones de productos genéticamente modificados, como a la conflictiva negociación del Protocolo de Bioseguridad del Convenio sobre Diversidad Biológica, en la que estos países lideran una posición contraria a la imposición de controles estrictos sobre el movimiento y liberación de organismos genéticamente modificados (ver *Puentes* Vol. 1 No. 2).

Por su parte, la gran mayoría de los países en desarrollo se han expresado en contra de incluir en una eventual ronda cualquier consideración extra-comercial, como las normas laborales. Pero no debe descartarse que estos nuevos temas puedan convertirse en elementos de negociación a la hora de obtener beneficios en otras áreas o incluir temas del programa incorporado (como revisiones al acuerdo antidumping y el acuerdo sobre subvenciones y medidas de salvaguardia) en una negociación multilateral.

Inversiones

Ciertos temas despiertan mayor controversia. La eventual negociación de un acuerdo multilateral sobre inversiones en la OMC, como posible tema

en una ronda, ha despertado la oposición de un creciente número de organizaciones de la sociedad civil – más de 400 ya han firmado una declaración en la que expresan que iniciar discusiones sobre un acuerdo de esta naturaleza en la OMC pondría una gran presión sobre los países en desarrollo para que acepten el modelo de la OCDE con efectos negativos sobre sus perspectivas de desarrollo. Estos grupos, en general, ven como una amenaza un acuerdo que podría limitar la potestad de los países más débiles de perseguir objetivos de política social, ambiental y económica.

Pero el programa incorporado, que prevé el análisis de la necesidad de complementar las medidas relativas a inversiones relacionadas con el comercio con disciplinas sobre inversiones, el fracaso de la negociación de un Acuerdo Multilateral sobre Inversiones en la OCDE, las recientes crisis en los mercados emergentes y el interés de las grandes empresas y los países de la OCDE en un régimen que dé mayores seguridades a las inversiones, juegan a favor de esta posibilidad.

Política de competencia

La cuestión de la política de competencia es otro de los temas contenidos en el programa adoptado en Singapur que se quieren traer a la OMC. Si bien el concepto de la política de competencia como instrumento para mejorar la eficiencia económica es cada vez más aceptado internacionalmente, hay una gran diversidad de estados de evolución y aplicación en todo el mundo. La cooperación internacional para profundizar en la investigación de este tema choca contra la reticencia de los gobiernos en compartir información confidencial y se da sólo en algunos acuerdos bilaterales entre países desarrollados. Las normas de la OMC tienen un alcance limitado en este tema, concentrándose principalmente en algunas disposiciones sobre monopolios, normas técnicas y licencias (el reciente Acuerdo Plurilateral sobre Telecomunicaciones contiene normas importantes sobre política de competencia).

Las posiciones que se están desarrollando sobre este tema con miras a la Ministerial de Seattle son función de ciertos elementos interconectados: (1) la importancia que se asigna a las distorsiones del comercio provocadas por la limitada cooperación internacional en esta materia; (2) el nivel de eficiencia que se lograría merced a tales normas multilaterales; (3) el grado de flexibilidad que tendrían estas normas frente a consideraciones de bien público y al trato especial y diferenciado para países en desarrollo; (4) la utilidad del tema como herramienta de negociación en una ronda.

La UE es el principal promotor de un acuerdo multilateral sobre política de competencia, que contendría una serie de principios centrales que tendrían que reflejarse en la legislación nacional. También incluiría aproximaciones comunes para enfrentar prácticas anti-competitivas internacionales, como la fijación de precios y niveles de producción, y un mecanismo de solución de diferencias.

EE.UU., por su parte, prefiere un esquema de cooperación más progresivo, basado en la evolución de la legislación interna. Este país es favorable a una aproximación causística a un régimen multilateral, a partir de acuerdos bilaterales.

La mayoría de los países en desarrollo están de acuerdo en la necesidad de aplicar políticas de competencia eficientes a nivel interno, pero hay una tendencia a enfatizar la necesidad de que cualquier arreglo multilateral sea lo suficientemente flexible para que los países puedan contemplar el interés público en sus legislaciones. Las propuestas van desde no iniciar negociaciones y continuar con el proceso de aprendizaje en la OMC hasta mejorar la cooperación internacional para reducir los costos de las investigaciones sobre política de competencia. Brasil ha expresado su deseo de que se definan principios básicos a nivel internacional para que se incluyan en acuerdos de cooperación que respeten los diferentes niveles de desarrollo en cada país.

Agricultura

Pero quizás el tema más espinoso continúa siendo el agrícola (ver *Puentes* Vol. 1 No. 3). La revisión del Acuerdo sobre Agricultura debe

comenzar este año y culminar en el 2003, y el posible lanzamiento de una Ronda del Milenio está íntimamente vinculado a este proceso, ya que en general se perciben pocas probabilidades de que esta revisión avance satisfactoriamente si no se la enmarca en un campo más amplio que permita otorgar concesiones mutuas. Además, la Cláusula de Paz del Acuerdo sobre Agricultura expira a finales del 2003. Esta cláusula protege de acciones de reclamo o represalias ciertos elementos de la Política Agrícola Común de la UE que distorsionan el comercio, por lo que la conclusión de una Ronda antes de ese entonces permitiría anticipar posibles situaciones después del 2003.

El Presidente del Brasil, Fernando H. Cardoso, resumió la situación diciendo que “la persistencia del proteccionismo y los subsidios en el comercio agrícola no es sólo la mayor anomalía que se debe corregir [en el sistema multilateral de comercio] sino también la más injusta a los países en desarrollo que tienen una ventaja competitiva en este sector”. Brasil, dijo, no le teme a una ampliación de la agenda de negociaciones (en referencia a una Ronda del Milenio) siempre y cuando tal ampliación no interfiera con el proceso de negociaciones que se ha definido para la agricultura, ni se la conciba como una forma de incorporar sólo sectores específicos de interés para algunos países. En todo caso, este ejercicio no debe realizarse hasta que los compromisos de la Ronda Uruguay hayan sido implementados, a fin de no desequilibrar las concesiones acordadas en ese momento.

Las posiciones y los intereses en torno a este tema no han variado. El Grupo Cairns, EE.UU. y varios países en desarrollo buscan colocar el comercio agrícola en las mismas condiciones que el comercio en otros bienes para tornar este sistema de comercio más sensible a los dictados del mercado, lo cual significa permitir que los países con ventaja comparativa en este campo puedan beneficiarse de los menores costos de producción. A estas preocupaciones se suman otras vinculadas principalmente a la seguridad alimentaria, ya de los países importadores netos, ya de naciones que necesitan proteger un sector agrícola más tradicional y fragmentado.

En el otro extremo del espectro, los países de Europa occidental, especialmente la Unión Europea, se aferran a su sistema de subsidios y otras formas de protección de su sector agrícola, argumentando que, como está implícito el Artículo 20 del Acuerdo sobre Agricultura, el sector agrícola es diferente de los demás incluidos en los acuerdos de la OMC, ya que es más que un sistema de producción y comercialización. Las recientes modificaciones a la Política Agrícola Común (la Agenda 2000) han sido duramente criticadas por el incremento en formas distorsivas de apoyo, como pagos compensatorios directos, que continúan protegiendo a los agricultores europeos de las señales del mercado. La Agenda 2000, dicen, no es una contribución suficiente a las negociaciones agrícolas en la OMC.

En suma, pese a los temores que despierta, son varios los incentivos para el lanzamiento de una Ronda para facilitar el proceso de revisión del Acuerdo sobre Agricultura.

Comercio y medio ambiente

Como hemos venido reportando (ver *Puentes* Vol.1 No.1) esta es otra de las cuestiones que despierta preocupaciones y controversia. De un lado pueden encontrarse los países industrializados, quienes insisten en la incorporación de este tema en la agenda de negociación. La UE ya ha lanzado un proceso de evaluación del impacto posible de una Ronda sobre la sustentabilidad del desarrollo y EE.UU. y Canadá planean lo propio. Por su parte, virtualmente todos los países en desarrollo se oponen al tratamiento de este tema por considerarlo un ‘caballo de Troya’ en el que se esconden todo tipo de impulsos proteccionistas.

Entre las formas como el tema puede ingresar en la negociación, hay quienes abogan por hacerlo a través del mecanismo de solución de diferencias, volviéndolo más transparente y receptivo a argumentos de naturaleza ambiental en las disputas (como ocurrió en cierta medida con el reciente Panel del camarón y las tortugas). Otras propuestas in-

cluyen la reducción de subsidios en determinados sectores, como pesquerías y agricultura, que, argumentan, fomentan la sobreexplotación; la eliminación de barreras y aranceles a bienes y servicios ambientales; y la asignación de un papel evaluador de las negociaciones en curso para el Comité de Comercio y Medio Ambiente.

No debe descartarse la posibilidad de que finalmente el tema entre en una Ronda. No sólo por las presiones de los países de la OCDE y amplios sectores de la sociedad civil, sino porque quienes se oponen pueden ver en este tema una ‘ficha’ más que les puede servir a la hora de negociar concesiones en otras áreas.

Normas de trabajo

El temor fundamental de quienes se oponen a vincular este asunto con la negociación comercial radica, al igual que en materia de comercio y medio ambiente, en el proteccionismo y la pérdida de competitividad que podría resultar de la ‘cláusula laboral’. Uno de los argumentos centrales de quienes propugnan esta cláusula es que tal disposición no sería proteccionista, sino protectora de los trabajadores contra la explotación. Como tal, más que entorpecer la competencia económica, fomentaría una competencia justa al eliminar ventajas inadmisibles. Más aún, la violación de las normas fundamentales del trabajo socava la legitimidad de un sistema comercial crecientemente cuestionado.

Pero estos son temores muy fuertes, y los países que más se oponen insisten que el foro apropiado para esta discusión es la Organización Internacional del Trabajo, tal como fue acordado en la Primera Conferencia Ministerial en Singapur.

Como se indicó arriba, se vislumbra que el tema laboral podría incluirse en el marco de la OMC de dos maneras: (1) a través de un mandato para que, como mínimo, se revise la aplicación párrafo 4 de la Declaración Ministerial de Singapur y según los resultados se inicien negociaciones, o, como hipótesis de máxima, se reconozca la necesidad de corregir las distorsiones en materia de observancia de normas laborales mediante negociaciones que refuercen la cooperación con la OIT, permitan medidas contra Miembros que violen las disposiciones laborales y establezcan un fondo de asistencia a los países en desarrollo; y, (2) mediante la creación de un comité sobre la relación entre las normas del trabajo y el comercio (tal como existe para medio ambiente y para desarrollo).

Cuestiones de procedimiento

La forma en que se deberían llevar adelante las negociaciones son también materia de divergencia. Hay tres formas básicas de encarar la continuación del proceso de liberalización:

- A través de una ronda multilateral comprensiva, en la que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Este fue el modelo de la Ronda Uruguay, y es el que se ha adoptado para la negociación del Área de Libre Comercio de las Américas;
- Una ronda multilateral de la que puedan surgir acuerdos parciales antes de su finalización;
- Una aproximación sectorial o de mini-rondas, en las que las negociaciones serían formalmente independientes unas de otras. Esta aproximación ha sido muy utilizada en las negociaciones comerciales en América Latina (p.ej. en el marco de la ALADI, o en las negociaciones Comunidad Andina de Naciones – Mercosur).

En general, se reconoce que una aproximación comprensiva da a las partes más débiles mayor poder negociador, al ampliar el espectro de compromisos que pueden ofrecer y obtener, al vincular distintos sectores en una misma negociación. Además de representar un único esfuerzo en lugar de varios esfuerzos separados, una ronda comprensiva es mejor garantía de que los acuerdos que se negocien serán coherentes entre sí. Por otra parte, este método desalentaría la proliferación de acuerdos regionales sobre comercio e inversiones, y podría ser una defensa más contra los impulsos proteccionistas.

El problema más evidente está en el tiempo que este procedimiento insumiría. La Ronda Uruguay tomó 7 años de negociaciones, en gran medida porque la misma incluyó una serie de cuestiones que excedían la mera reducción de aranceles (p.ej.: el comercio de servicios, la institucionalidad de la OMC) y otras particularmente sensibles (p.ej. el acuerdo sobre agricultura). Si la nueva ronda abarcara nuevos temas, algunos complejos y otros espinosos (política de competencia, contrataciones del sector público, inversión, medio ambiente, cláusulas laborales), el plazo de tres años que se maneja para la ronda podría quedar en una expresión de deseos – la ronda duraría mucho más.

Uno de los proponentes de la aproximación comprensiva es la Unión Europea. En el documento para los Ministros de Comercio arriba citado, la Comisión indica que “[u]na ronda comprensiva es necesaria para asegurar un equilibrio. El programa incorporado de la OMC prevé negociaciones para continuar con la liberalización del comercio agrícola y de servicios comenzando a finales de 1999, pero sin una fecha de finalización. Estas negociaciones sólo darán resultados sustantivos si se las coloca en un marco más amplio de negociación que tenga límites temporales. La Ronda Uruguay ha demostrado que sólo en una aproximación comprensiva, que involucre un amplio espectro de temas, pueden todos los participantes identificar beneficios. Una aproximación sectorial estrecha no puede lograr esto”. La misma posición ha manifestado Japón.

Por su parte, EE.UU. se ha manifestado en favor de una aproximación sectorial o una ronda que permita resultados tempranos. Así, el Presidente Clinton, manifestó que “deberíamos explorar formas de eliminar barreras sin esperar a que todas las cuestiones en todos los sectores se resuelvan”. En la misma línea, Charlene Barshefsky, Representante de ese país para las cuestiones comerciales internacionales, expresó que “no podemos entrar a una negociación en la que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Trabajemos de abajo hacia arriba. Revisemos las áreas posibles de negociación, incluyendo las acordadas en la Ronda Uruguay, como servicios y agricultura, y recién entonces decidamos sobre la mejor forma de proceder”.

La liberalización y el desarrollo sostenible

Como se dijo arriba, un creciente número de organizaciones de la sociedad civil se oponen a nuevos impulsos liberalizadores. Los argumentos van desde la necesidad de contar con una evaluación de los impactos de los Acuerdos de la Ronda Uruguay y de una eventual nueva ronda antes de dar inicio al proceso, hasta la negación de que la liberalización pueda contribuir a un desarrollo sostenible.

Desde una posición más moderada, hay quienes dicen que todo progreso hacia un sistema basado en reglas y no en la fuerza, en el que se incluyan cuestiones sociales y ambientales, implica una mayor previsibilidad del sistema mismo, lo cual es un mejor ambiente para el desarrollo sostenible.

Pero en general, hay un reconocimiento de que el comercio internacional y las inversiones son claves para el desarrollo humano, que es en definitiva el fin al que deben apuntar. Y los gobiernos tienen la responsabilidad de “cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable y abierto que [lleve] al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental”, tal como se pronunciaron en la Cumbre de la Tierra en 1992.

A comienzos del año 2000, cualquier Ronda de negociación comercial debe ser sensible a estas premisas y reconocer que el sistema comercial debe estar al servicio de los objetivos trascendentales que se resumen en la idea de desarrollo sostenible.

PUENTES

Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible

BRIDGES/PUENTES/PASSERELLES

buscan proveer información y análisis sobre la intersección entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible para el creciente número de actores de todo el mundo involucrados en el debate. El Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD) y sus organizaciones asociadas reconocen el auspicio del Gobierno Federal Suizo (BAWI) para la publicación de Bridges y el de la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur para Puentes y Passerelles.



BRIDGES Between Trade and Sustainable Development es publicado mensualmente por el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible.

Director: Ricardo Meléndez-Ortiz

Editora: Anja Halle

Editora asociada: Caroline Dommen

Dirección: 13 chemin des Anémones
1219 Ginebra, Suiza

Tel: (41-22) 917-8492

Fax: (41-22) 917-8093

E-mail: ictsd@ictsd.ch

Web: <http://www.ictsd.org>



PUENTES Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible, la versión para América Latina de *BRIDGES*, es publicada bimestralmente en colaboración con la Fundación Futuro Latinoamericano.

Coordinador: Nicolás J. Lucas

Editora asociada: María Amparo Albán

Asistentes editoriales: Régine Clément y Marijke Hallo de Wolf

Dirección: Casilla 17-17-558
Quito, Ecuador

Telefax: (593-2) 920-635/920-636

E-mail: flla2@fulano.org.ec



enda-tiers monde

PASSERELLES entre le commerce et le développement durable es la versión en francés de *BRIDGES*, publicada bimestralmente en colaboración con ENDA-Tiers Monde.

Coordinador: Taoufik Ben Abdallah

Dirección: B.P. 3370,
Dakar, Senegal

Tel: (221) 821-7037

Fax: (221) 822-2695

E-mail: syspro2@enda.sn

Web: <http://www.enda.sn>

Las opiniones expresadas en los artículos firmados en *BRIDGES/PUENTES/PASSERELLES* son exclusivas de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del ICTSD y las publicaciones. El material de estas publicaciones puede ser utilizado en otras publicaciones con una completa cita de su fuente.

Bridges Weekly Trade News Digest

Para suscribirse al resumen semanal en inglés del ICTSD de noticias comerciales relevantes para los interesados en Medio Ambiente y Desarrollo, por favor enviar un mensaje a: Majordomo@igc.apc.org. Dejar "subject" en blanco y en el cuerpo del mensaje escribir: subscribe tradedev. Para copias vía fax y correo, también contactar al ICTSD. También disponible en el sitio electrónico del ICTSD.

Todas las reuniones de la OMC se celebran en Ginebra. Las fechas están sujetas a cambios; rogamos ponerse en contacto con la OMC para confirmarlas. Todos los números de teléfono y de fax empiezan con (41-22) 739. Los números indicados en la lista a continuación corresponden únicamente a las extensiones. Internet: <http://www.wto.org>

Junio 14-18	Segunda Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, La Habana, Cuba Contacto: Humberto Arango Sales, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Tel: (537) 57-0606/57-0601, fax: (537) 33-8054, e-mail: arango@dc.citma.gov.cu	Julio 7-8	Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC Contacto: Matthijs Geuze, tel: 5418, fax: 5790
Junio 16	Organo de Solución de Diferencias de la OMC Contacto: Paulo Barthel-Rosa, tel: 5095, fax: 5761	Julio 7-9	Reunión de Expertos en el impacto de la modificación de las estructuras de la oferta y la demanda en el mercado sobre los precios de los productos básicos y las exportaciones de gran interés para los países en desarrollo, UNCTAD, Ginebra, Suiza Contacto: Oficina del Secretario Adjunto de la Junta, Ginebra. Tel: (41-22) 907-5636, fax: 907-0056, e-mail: karma.tenzing@unctad.org
Junio 18	IV Conferencia Anual sobre Solución de Diferencias en la OMC, Bruselas, Bélgica Contacto: Nick May, Cameron May Ltd., Londres, Reino Unido. Tel: (44-171) 582-7567, fax: 793-8353, e-mail: conferences@cameronway.com	Julio 8-9	Conferencia sobre el Comercio de Servicios en las Américas, BID-INTAL/OEA, San José, Costa Rica Contacto: Oficinas de INTAL, Washington, DC. Tel: (202) 320-1850, fax: 320-1865, e-mail: int/inl@iadb.org
Junio 18-20	XIV Período de sesiones del Foro Global sobre Biodiversidad, Montreal, Canadá Contacto: Caroline Martinet, GBF-14/SBSTTA4, UICN, Gland, Suiza. Tel: (41-22) 999-0001, fax: (41-22) 999-0025, e-mail: ccm@hq.iucn.org	Julio 20-21	Comité de Acuerdos Comerciales Regionales Contacto: Carmen Pont-Vieira, tel: 5144, fax: 5774
Junio 21-23	Taller sobre Agricultura, Comercio y la OMC, Asociación de Agricultores Alemanes Protestantes/Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), Ginebra, Suiza Contacto: Sophia Murphy, IATP, Minneapolis MN, USA. Tel: (1-612) 870-0453, fax: 870-4846, e-mail: smurphy@iatp.org	Julio 21-25	IV Reunión del Organo Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico de la Convención de Diversidad Biológica, Montreal, Canadá Contacto: Secretaría de la Convención, Montreal. Tel: (514) 288-2220, fax: 288-6588, e-mail: chm@biodiv.org
Junio 21-25	Cuarta Reunión del Organo Subsidiario para el Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico de la Convención de Diversidad Biológica, Montreal, Canadá Contacto: Secretaría de la Convención, Montreal, Canadá. Tel: (514) 288-2220, fax: 288-6588, e-mail: chm@biodiv.org	Julio 22	Organo de Solución de Diferencias Contacto: Paulo Barthel-Rosa, tel: 5095, fax: 5761
Junio 24-25	Comité de Agricultura de la OMC Contacto: Paul Shanahan, tel: 5095, fax: 5760	<div> <p>PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS</p> <p>BRYAN, A.; ROGET BRYAN. 1999. "The New Face of Regionalism in the Caribbean: The Western Hemisphere Dynamic". The North-South Agenda, Ensayo 35. Publicación del North-South Center. Miami.</p> <p>CAILLAUX ZAZZALI, J.; MANUEL RUIZ MULLER. 1998. "Acceso a recursos genéticos: propuestas e instrumentos jurídicos". Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Lima.</p> <p>CAMERON, J; KAREN CAMPBELL (eds.). 1999. "Dispute Resolution in the World Trade Organisation". Cameron May Ltd. Londres.</p> <p>COMISION PARA LA COOPERACION AMBIENTAL. 1999. "Agenda de América del Norte para la Acción: 1999-2001". Comisión para la Cooperación Ambiental. Montreal, Canadá.</p> <p>OCDE. 1998. "Open Markets Matter. The Benefits of Trade and Investment Liberalisation". OCDE. París.</p> <p>SAFA, H. I. 1999. "Women Coping with Crisis: Social Consequences of Export-Led Industrialization in the Dominican Republic". The North-South Agenda, Ensayo 36. Publicación del North-South Center. Miami.</p> </div>	
Junio 27-29	Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), Banff, Alberta, Canadá Contacto: Janine Ferretti, Montreal. Tel: (514) 350-4363, fax (514) 350-4345, e-mail: melhadj@ccemtl.org		
Junio 28-29	Cumbre de Presidentes y Jefes de Gobierno de América Latina, el Caribe y de la Unión Europea, Rio de Janeiro. Contacto: Coordinación Ejecutiva, Federación de Industrias del Estado de Río de Janeiro. Tel: (55-21) 544-6525, fax: (55-21) 563-4617, e-mail: mazevedo@mre.gov.br		
Junio 29-30	Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC Contacto: Doaa Abdel Motaal, tel: 5873, fax: 5620		
Julio 7-8	Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC Contacto: Gretchen Stanton, tel: 5086, fax: 5760		

